

INE/CG259/2019

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO DE QUEJA EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN, INSTAURADO EN CONTRA DE LA OTRORA COALICIÓN “POR MÉXICO AL FRENTE” EN MICHOACÁN, INTEGRADA POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS ACCIÓN NACIONAL, DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA Y MOVIMIENTO CIUDADANO Y DE LOS CC. ANTONIO GARCÍA CONEJO Y ALMA MIREYA GONZÁLEZ SÁNCHEZ, ENTONCES CANDIDATOS A SENADORES, IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE INE/Q-COF-UTF/692/2018

Ciudad de México, 22 de mayo de dos mil diecinueve.

VISTO para resolver el expediente **INE/Q-COF-UTF/692/2018**, integrado por hechos que se considera constituyen infracciones a la normatividad electoral en materia de origen y aplicación de los recursos derivados del financiamiento de los Partidos Políticos.

A N T E C E D E N T E S

I. Escrito de queja. El ocho de agosto de dos mil dieciocho, se recibió en la Unidad Técnica de Fiscalización, el oficio INE/UTF/EF-MI/242/18, signado por el Enlace de Fiscalización en el estado de Michoacán, a través del cual remitió el escrito de queja presentado por el C. Juan Antonio Ixtlahuac Orihuela, otrora candidato al Senado de la República por el Partido Revolucionario Institucional, en contra de los CC. Antonio García Cornejo y Alma Mireya González Sánchez, ambos entonces candidatos al Senado de la República por la otrora Coalición “Por México al Frente” en Michoacán, integrada por los partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, en el marco del Proceso Electoral Federal 2017-2018; denunciando hechos que se considera podrían constituir infracciones a la normativa electoral, en materia de origen, monto, destino y aplicación de los recursos derivados del financiamiento de los partidos políticos por presuntos gastos de campaña no reportados por concepto de camionetas blindadas, lo anterior en beneficio de la campaña de los sujetos obligados denunciados. (Fojas 2-45 de expediente)

II. Hechos denunciados y elementos probatorios. De conformidad con el artículo 42, numeral 1, fracción II, incisos b) y c) del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, se transcriben los hechos denunciados y se listan los elementos probatorios ofrecidos y aportados por el quejoso en su escrito de queja:

“

HECHOS

2.- Durante la campaña electoral que inicio el día 30 de marzo de 2018 y concluyo el 27 de junio de 2018, ANTONIO GARCIA CONEJO, candidato a senados de la República en Michoacán por la coalición ‘Por México Al Frente’, integrada por los partidos Acción Nacional, Movimiento Ciudadano y de la Revolución Democrática, utilizo diversos vehículos blindados, con propaganda política de Antonio García Conejo, arrendados por la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo, según contrato de arrendamiento número CAPDE-EM-LPE-021/2017-1, de 9 camionetas blindadas Jeep Grand Cherokee Limited 2016 y una Suburban LTZ 2016, celebrados por el Gobierno del Estado con la empresa Capital Leasing México, S.A. de C.V. con sede en la ciudad de San Luis Potosí, por instrucciones de SILVANO AUREOLES CONEJO, en cuanto Gobernador del Estado de Michoacán de Ocampo, dada la relación de parentesco con el candidato ANTONIO GARCÍA CONEJO, esto se afirma en razón del conocimiento público de dicha relación familiar, lo que nos determina que dicho candidato en cuanto hermano del Gobernador del Estado de Michoacán, utilizó recursos en su campaña, por lo que solicito se de vista a LA FEPADE, para los efectos legales que correspondan. A lo que se le suma el gasto de mantenimiento de dichas unidades vehiculares y los insumos, contratos que fueron solicitados ante la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo, mediante escrito de esta misma fecha, que anexo y exhibo para los efectos legales correspondientes, contratos que bajo protesta de decir verdad nos fueron negados, y de los mismos se tiene conocimiento que la UNIDAD TÉCNICA DE FISCALIZACIÓN DEL INE, realiza una investigación para agregarlos al Dictamen del gasto de tope de campaña, siendo así necesaria la verificación y fiscalización por la UTF, mediante los cuales se acredita el gasto en el rebase de tope de campaña por el candidato ANTONIO GARCÍA CONEJO.

2.- En términos de la normatividad de fiscalización, en lo referente a los gastos de transportación a los eventos políticos que realizó ANTONIO GARCIA CONEJO, durante la campaña en todo el estado de Michoacán, gastos que no fueron informados y reportados ante la Unidad Técnica de Fiscalización del INE, por ANTONIO GARCÍA CONEJO, candidato a senador de la República

en Michoacán por la coalición 'Por México Al Frente', integrada por los partidos Acción Nacional, Movimiento Ciudadano y de la Revolución Democrática, gastos aproximados por la cantidad de 63 millones de pesos, según contrato de arrendamiento número CAPDE-EM-LPE-021/2017-1, de 9 camionetas blindadas Jeep Grand Cherokee Limited 2016 y una Suburban LTZ2016, celebrados por el Gobierno del Estado con la empresa Capital Leasing México, S.A. de C.V. con sede en la ciudad de San Luis Potosí, gasto no declarado hasta el día de hoy por ANTONIO GARCÍA CONEJO, ante la UNIDAD TECNICA DE FISCALIZACIÓN DEL INE, por lo que solicito a esta autoridad investigue y requiera el informe correspondiente, al tener la imposibilidad jurídica de contar con esa información, materialmente.

3.- Los candidatos Antonio García Conejo y Alma Mireya González Sánchez integrantes de la fórmula de candidatos al senado postulados por la coalición 'Por México Al Frente' en Michoacán, insisto, no han declarado el gasto realizado por concepto de transportación.

Para acreditar lo antes expuesto, debe esta oficialía electoral revisar el contenido íntegro de la información que circula en las redes sociales como Facebook, twitter, Instagram y WhatsApp, así como en el siguiente vínculo:
<https://www.idimedia.com/investigaciones-disruptivas/gasta-gobierno-de-michoacan-63-mdp-en-arrendamiento-de-camionetas-blindadas/>

Que a saber contiene lo siguiente:



- Son 9 camionetas que se pagarán en un plazo de 36 meses*
- El contrato vence hasta julio de 2020.*
- Vehículos sólo fueron utilizados para apoyar a perredistas en las pasadas campañas.*

Morelia, Michoacán. - El Gobierno de Michoacán gastó 63 Millones 99 mil 995 pesos en arrendamiento de 9 camionetas con el mejor blindaje en protección y seguridad para los funcionarios públicos. El contrato firmado por la Secretaría de Finanzas y por el Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo de Michoacán establece que dicha renta de vehículos es por un plazo 36 meses, mismo que se firmó el 7 de julio de 2017 y concluirá el 3 de julio de 2020.

De acuerdo al contrato número CAPDE-EM-LPE-021/2017-1, el Gobierno de Michoacán firmó el convenio de arrendamiento con la empresa Capital Leasing México de la ciudad de San Luis Potosí, de ese estado. Según el Anexo II, el Gobierno paga un millón 685 mil 679.31 pesos. El 3 de agosto el 2017, la Secretaría de Finanzas pagó 2 millones 415 mil 540.47 pesos como pago inicial.

El contrato precisa que de no pagarse a tiempo o retrasarse el pago mensual de las nueve camionetas, la empresa podría embargar estas camionetas exclusivas para el uso de gobernadores, titulares de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Procuraduría General de Justicia del Estado, así como funcionarios estatales que se sientan en peligro.

Incluso, la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral detectó que varios candidatos del PRD, al igual que el senador electo del PRD, Antonio García Conejo, a quienes se les podrían incrementar los gastos de tope de campaña por la utilización de estos vehículos propiedad del estado y por el consumo de insumos como gasolina.

Con base a documentos en poder de esta casa editorial se dio cuenta que el pasado siete de julio de 2017 el Comité de Adquisidores del Poder Ejecutivo suscribió un contrato con la empresa Capital Leasing México S.A. de C.V., con sede en San Luis Potosí, para la renta de nueve vehículos blindados Jeep Grand Cherokee Limited 2016 y una Suburban LTZ 2016, con un consto total para las finanzas michoacanas de más de 63 millones de pesos.

Dichos vehículos, de acuerdo a las especificaciones técnicas del mismo contrato, cuentan con el nivel de protección V+, la cual es utilizada para prevención y mayor protección en contra de atentados por bala con armas de gruesa calibre, por lo cual es blindaje más completo y costoso en el mercado.

De acuerdo a los precios comerciales de los vehículos y blindaje, cada camioneta Jeep Grand Cherokee Limited 2016 tiene un costo de 649 mil pesos, más 700 mil pesos del blindaje; mientras que la camioneta Suburban LTZ 2016 tiene un precio comercial de un millón 349 mil pesos, más 700 mil del blindaje; por lo que, de haberse comprado en lugar de rentado, el Gobierno

de Michoacán habría gastado 14 millones 190 mil pesos, es decir, 48 millones 909 mil 995 pesos menos de lo que se contrató.

El blindaje cuenta con características de ser opaco como pruebas, costados, postes y todas las áreas que hacen parte de la cabina interior, están blindadas con acero balístico cal. 12 para protección contra granada de fragmentación. Los cristales son balísticos, con una configuración de cristales empalmados policarbonato. Todos los marcos de las puertas y ventanas cuentan con traslapes en acero balístico.

Dentro de la garantía, se precisa que los cristales tienen un plazo de tres años contra la deslaminación. La garantía del vehículo y del blindaje es de dos años y/o 50 mil kilómetros, lo que ocurra primero en las mismas condiciones que la original agencia, los mantenimientos deben ser realizados por la empresa encargada del blindaje.

Los mantenimientos son cada 5 mil kilómetros, en caso de no haber mantenimiento se invalida la garantía.

Camionetas incrementarían gastos de campaña para candidatos.

Cabe señalar que este mismo contrato está en poder de la Unidad Fiscalizadora del Instituto Nacional Electoral [INE], ya que su estudio y análisis se integró a los gastos de campaña de los cuatro candidatos, por lo que la utilización de estos vehículos rentados por parte del Gobierno Estatal incrementó de manera considerable los gastos de campaña de los candidatos antes referidos.

Así pues, será tarea del INE el realizar el análisis particular de cada uno de los casos, de tal suerte que se pueda determinar si la utilización de dichas camionetas, sumando los gastos ya reportados por los candidatos están dentro del tope de campaña establecido.

Además, vale la pena recordar que será este mismo lunes seis de gasto cuando el Instituto Nacional Electoral entregará los informes de fiscalización de cada uno de los candidatos que participaron en el proceso, de tal suerte que se pueda dar transparencia respecto a los recursos públicos que utilizaron cada uno de los candidatos durante el periodo de campañas políticas.

Al gasto de la renta de las camionetas, se tendrá que sumar también diversos insumos como la gasolina, mantenimiento, aceites y demás requerimientos necesarios para la operación de los automotores.

Por lo anterior no se descarta que algunos de estos tres candidatos electos puedan rebasar el tope de gastos de campaña, medida que cabe señalar, de acuerdo a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electores contempla la nulidad de la elección.

Francisco Ramírez/DI Media

(...)

DERECHO

Como puede observarse de los hechos narrados y lo publicado en el vínculo citado, además de las probanzas ofrecidas en la presente queja, se demuestra que el candidato ANTONIO GARCIA CONEJO, utilizo recursos públicos de Gobierno del Estado de Michoacán en promover su campaña electoral, con violación a las disposiciones en materia electoral, y a las disposiciones en materia de Fiscalización, máxime que no reporto al respecto gasto alguno en relación a estos excesos lo que repercute en el rebase de tope de gastos de campaña. Luego entonces, transgrede mis derechos político electorales, dejándome en notorio estado de desventaja en relación con el electorado, con violación al principio de equidad e igualdad de condiciones en la contienda electoral.

En ese sentido resultan aplicable los siguientes artículos del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización:

(...)

Es claro que en la especie se actualizan las circunstancias violatorias de la Ley electoral, porque el hecho de que los denunciados y la coalición que los postula haya reportado un gasto muy inferior al real durante los eventos de campaña constituyen una clara infracción a la ley electoral y por lo tanto debe ser sancionada por esta autoridad electoral.

(...)

En este sentido, los candidatos ANTONIO GARCIA CONEJO Y ALMA MIREYA GONZALEZ SANCHEZ, postulado por la Coalición 'Por México al Frente' integrada por los partidos políticos de Partido Acción Nacional, Partido de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano incumplieron con lo dispuesto en los artículos 25, numeral 1, inciso i), con relación al artículo 54, numeral 1; 79, numeral 1, inciso a), fracción I, de la Ley de Partidos, en relación con los artículos 96 y 127 del Reglamento de Fiscalización; así como 445 numeral 1, inciso e), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales a saber:

(...)

En el rebasé de los topes de gasto de campaña en que ha incurrido el C. ANTONIO GARCIA CONEJO, y ALMA MIREYA GONZALEZ SANCHEZ, candidatos a Senadores de la República, del Estado de Michoacán, postulados por la coalición, esta Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, debe considerar el contenido de los artículos 41, fracción VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 442, numeral 1, incisos a) y c); 443 inciso f); 445, numeral 1 inciso e); 456, numeral 1, inciso a) Fracción II, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que en lo conducente establecen:

(...)

Dichas violaciones deberán acreditarse de manera objetiva y material. Se presumirá que las violaciones son determinantes cuando la diferencia entre la votación obtenida entre el primero y el segundo lugar sea menos al cinco por ciento.

(...)"

Para acreditar su pretensión, el quejoso presentó como elementos probatorios los siguientes:

- Solicitud al Secretariado del Instituto Nacional Electoral, a efecto de verificar y fiscalizar la red social Twitter, Facebook e Instagram, respecto de la fórmula de candidatos al Senado postulados por la coalición "Por México al Frente" en Michoacán, integrada por los partidos Acción Nacional, Movimiento Ciudadano y de la república Democrática, encabezadas por Antonio García Conejo y Alma Mireya González Sánchez, así como el vínculo <https://www.idimedia.com/investigaciones-disruptivas/gasta-gobierno-de-michoacan-63-mdp-en-arrendamiento-de-camionetas-blindadas/>
- Escrito dirigido al Secretario de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo, el cual fue suscrito por el C. Juan Antonio Ixtlahuac Orihuela, candidato al Senado de la República por el Partido Revolucionario Institucional, a través del cual se le solicita que expida copias certificadas de todas y cada uno de los contratos de transportación relacionados con los eventos de campaña del C. ANTONIO GARCÍA CONEJO, asimismo del contrato de arrendamiento número CAPDE-EM-LPE-021/2017-1, respecto a 9 camionetas blindas, el cual fue celebrado entre el Gobierno del Estado y la

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/692/2018

empresa denominada Capital Leasing México, S.A. de C.V. con sede en la ciudad de San Luis Potosí.

- Escrito de petición dirigido al C. Titular del Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, mismo que fue suscrito por el C. Juan Antonio Ixtlahuac Orihuela, mediante el cual se solicita se expidan copias certificadas de todas y cada uno de los contratos de transportación relacionados con los eventos de campaña del C. Antonio García Conejo, asimismo del contrato de arrendamiento número CAPDE-EM-LPE-021/2017-1, respecto a 9 camionetas blindas, el cual fue celebrado entre el Gobierno del Estado y la empresa denominada Capital Leasing México, S.A. de C.V. con sede en la ciudad de San Luis Potosí.

III. Acuerdo de admisión e inicio del procedimiento de queja. El trece de agosto de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización, tuvo por admitida la queja mencionada y acordó integrar el expediente respectivo, registrarlo en el libro de gobierno, admitir a trámite y sustanciación el escrito de mérito, así como notificar el inicio del procedimiento al Secretario del Consejo General del Instituto, así como al Consejero Presidente de la Comisión de Fiscalización de dicho órgano colegiado, al quejoso, a la entonces Coalición “Por México Al Frente” en Michoacán, así como a los CC. Antonio García Cornejo y Alma Mireya González Sánchez, ambos candidatos al Senado de la República por la Coalición “Por México Al Frente” en Michoacán, asimismo, integrada por los partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, remitiéndoles las constancias que obren en el expediente, publicar el acuerdo de referencia en los estrados del Instituto Nacional Electoral. (Foja 46 del expediente).

IV. Publicación en estrados del acuerdo de admisión del procedimiento.

a) El trece de agosto de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización fijó en los estrados de este Instituto durante setenta y dos horas, el acuerdo de admisión del procedimiento de mérito y la respectiva cédula de conocimiento. (Foja 47 del expediente).

b) El dieciséis de agosto de dos mil dieciocho, se retiraron del lugar que ocupan en el Instituto los estrados de la Unidad Técnica de Fiscalización, el citado acuerdo de admisión, la cédula de conocimiento y mediante razones de publicación y retiro, se hizo constar que dicho acuerdo y cédula fueron publicados oportunamente. (Foja 48 del expediente).

V. Notificación del inicio del procedimiento al Consejero Presidente de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. El catorce de agosto de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/41986/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización informó al Consejero Electoral y Presidente de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, la recepción y el registro en el libro de gobierno del procedimiento de queja identificado como INE/Q-COF-UTF/692/2018. (Foja 50 del expediente).

VI. Notificación del inicio del procedimiento al Secretario del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. El catorce de agosto de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/41985/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización informó al Secretario del Consejo General de este Instituto, la recepción y el registro en el libro de gobierno del procedimiento de queja identificado como INE/Q-COF-UTF/692/2018. (Foja 51 del expediente).

VII. Notificación de inicio del procedimiento al Representante Propietario del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. El veinte de agosto de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/42232/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó el inicio del procedimiento de mérito Representante Propietario del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, corriéndole traslado con la totalidad de elementos de prueba que integran el escrito de queja. (Fojas 52-53 del expediente).

VIII. Notificación de inicio del procedimiento y emplazamiento al Representante Propietario del Partido de la Revolución Democrática ante el Consejo General Electoral del Instituto Nacional Electoral.

a) El veinte de agosto de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/42226/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó el inicio del procedimiento de mérito y emplazó al Representante Propietario del Partido de la Revolución Democrática ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, corriéndole traslado con la totalidad de elementos de prueba que integran el escrito de queja. (Fojas 54-56 del expediente).

b) Mediante oficio sin número, de fecha veinticuatro de agosto de dos mil dieciocho, el Representante Propietario del partido, dio respuesta al emplazamiento que en términos del artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e) del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, en la parte conducente señala: (Fojas 57-71 del expediente).

“A objeto de la queja se contesta:

Que es incongruente el objeto de la supuesta queja que presenta por propio derecho del ciudadano Juan Antonio Ixtláhuac Orihuela, toda vez que si bien afirma que el propósito de su escrito es demostrar que la campaña ‘...costó más de lo reportaron a esta autoridad electoral...’ la idea total de sus argumentos se centra en demostrar el uso de recursos públicos, en concreto en el uso de vehículos al servicio del Gobierno del Estado de Michoacán a favor de la candidatura al Senado de la República por el principio de Mayoría Relativa del Estado de Michoacán formada por los ciudadanos ANTONIO GARCÍA CONEJO y ALMA MIREYA GONZÁLEZ SÁNCHEZ más no el exceso en los gastos de campaña. De ahí que no sea congruente que en primer término acuse de exceso en el gasto y que sólo argumente respecto del uso de sus servicios o bienes públicos. Lo que convierte a su queja en oscura por su imprecisión.

A los hechos en su orden se contesta:

En término, no debe pasar por desapercibido de esa Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral que, lo manifestado por el denunciante en su escrito de queja, es completamente oscuro, impreciso y por demás infundado, dado que las acusaciones vertidas a todas luces son genéricas, vagas e imprecisas, puesto que no se encuentra ubicada en modo, tiempo, lugar y circunstancias.

Lo anterior es así, pues al margen de que los argumentos del quejoso se basan en la lectura de una nota periodística, circunstancia que se desarrollará en líneas posteriores, lo cierto es que jamás acredita que las supuestas camionetas a que se refiere el contrato de arrendamiento CADPE-EM-LPE-021/2017-1 sean las mismas que fueron utilizadas en campaña por la fórmula de la Coalición ‘Por México al Frente’ por los ciudadanos ANTONIO GARCÍA CONEJO y ALMA MIREYA GONZÁLEZ SÁNCHEZ. Es decir, no existe mención alguna que vincule a los diversos automotores que se refiere dicho contrato con aquellos que fueron registrados en el Sistema Integral de Fiscalización de la campaña, y, por ende, tampoco existe ningún medio de convicción que avale la relación entre los dichos de la nota periodística, los razonamientos del quejoso y los registros validados por la autoridad fiscalizadora electoral.

Bajo este sustento, es pertinente que esta Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, tenga presente el criterio sustentado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en las siguientes jurisprudencias:

(...)

Bajo estas premisas, en el asunto que nos ocupa, los hechos denunciados a todas luces deviene a ser infundados dado que no se encuentran soportados en medios de prueba idóneos para acreditar los extremos de la acusación, además de que la narrativa vertida por la parte quejosa, en todo momento son vagos, imprecisos, y genéricos, puesto que no se expresan de manera clara y precisa las circunstancias de modo, tiempo y lugar que hagan verosímil la versión de los hechos denunciados, premisas necesarias que proporcionan los elementos indispensables para establecer la posibilidad de que los actos que se denuncian, efectivamente hayan ocurrido, puesto que son el objeto esencial y principal de un conjunto de exigencias para garantizar la gravedad y seriedad de los motivos de la queja, del inicio del procedimiento sancionador en que se actúa, y primordiales para justificar que la autoridad entre acción y realice las primeras investigaciones, así como la posible afectación a terceros, al proceder a recabar los elementos necesarios para la satisfacción de su cometido.

En otras palabras, los argumentos vertidos por el quejoso no exponen la razón de la afectación de derechos de manera cierta y evidente, pues parte de premisas falsas para arribar a una conclusión igual. En este sentido, la Corte ha determinado en la jurisprudencia 2ª./J. 108/2012, que los agravios cuya construcción parte de premisas falsas son inoperantes, ya que a ningún fin práctico conduciría su análisis y calificación, pues al partir de una suposición que no resultó verdadera, su conclusión resulta ineficaz para obtener la restitución de algún derecho. Y en este caso, no existe medio probatorio alguno que sustente los supuestos hechos que integran su queja, en consecuencia, no existe medio probatorio alguno que sustente los supuestos hechos que integran su queja, en consecuencia, no existe un vínculo creíble, ni confiable de sus afirmaciones con el derecho que supuestamente alega vulnerado.

En este orden de ideas, como es de verdad sabida y de derecho explorado, si de los hechos narrados no existe la apariencia de ser verdaderos o creíbles, de acuerdo a la forma natural de ser de las cosas, al encontrarse caracteres de falsedad o irrealidad dentro del relato, no se encuentra justificación racional poner en obra a una autoridad, para averiguar hechos carente de verosimilitud dentro de cierta realidad en la conciencia general de los miembros de la sociedad, de tal manera, que cuando se denuncien hechos que no se encuentren ubicados en modo tiempo, lugar y circunstancias, dichas acusaciones a todas luces se encuentran cubiertas de falta de credibilidad.

Es por ello que, en todo procedimiento sancionador se deben observar todos los principios de derecho, entre los cuales se encuentra el relativo a que las quejas, denuncias presentadas y procedimientos sancionadores que inicien, que puedan constituir infracciones a la normatividad electoral, deben estar sustentadas, en hechos claros y preciso en los cuales se expliquen las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se verificaron y aportar por lo menos un mínimo de material probatorio a fin de que la autoridad administrativa electoral esté en aptitud de determinar si existe indicios que conduzcan a iniciar su facultad investigadora, pues la omisión de alguna de estas exigencias básicas no es apta para instar el ejercicio de tal atribución y como consecuencia el procedimiento iniciado con motivo de la queja o denuncia debe ser declarado como infundado.

Bajo esta cadena argumentativa, el asunto que nos ocupa, al no encontrarse ubicados los hechos denunciados en modo, tiempo lugar y circunstancias, es dable que esa Unidad Técnica de Fiscalización determine como infundado el presente procedimiento especial sancionador en materia de fiscalización.

Aguando a lo anterior, es importante destacar que toda la imputación que vierte el quejoso en el asunto que nos ocupa, es completamente falsa dado que NUNCA SE UTILIZARON RECURSOS PÚBLICOS QUE INDICA LA PARTE ACTORA, NI A TRAVÉS DE LAS CAMIONETAS QUE MENCIONA, NI DE NINGUNA OTRA FORMA.

En este sentido, no pasa por desapercibido que la actora para acreditar los extremos de su imputación, ofrece como prueba el contenido de la nota periodística contenida en la página de internet <https://www.idimedia.com/investigaciones-disruptivas/gasta-gobierno-de-michoacan-63-mdp-en-arrendamiento-de-camionetas-blindadas/>, del medio de comunicación 'Id Media', misma que desde este momento SE OBJETA EN TODO SU CONTENIDO, ALCANCE Y VALOR PROBATORIO QUE SE LE PRETENDA DAR, en virtud de que, si bien es cierto, en dicha nota periodística, titulada como 'Gasta Gobierno de Michoacán 63 mdp en arrendamiento de camionetas blindadas', se indica que '...al igual que el senador electo del PRD, Antonio García Conejo, a quienes se les podrían incrementar los gastos de tope de campaña por la utilización de estos vehículos propiedad del estado y por el consumo de insumos como gasolina', y se exhibe parte del contrato número CAPDER-EM-LPE-021/2017-1, a través del cual, pasado 7 de julio de 2017 el Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo del estado de Michoacán, suscribió con la empresa 'Capital Leasing México S.A. de C.V', con sede en San Luis Potosí, para la renta de nueve vehículos blindados, con un costo total de más de 63 millones de pesos.

También lo es que, no existe prueba alguna mediante la cual, se acredite la veracidad de lo publicado en la nota periodística en comento y como consecuencia de lo aseverado por el quejoso en el asunto que nos ocupa.

En este sentido, la imputación vertida en el asunto que nos ocupa, así como externado en por el medio de comunicación 'Id Media' en la nota periodística antes descrita, a todas luces resulta ser vaga, imprecisa, oscura e improcedente, dado que no se encuentra ubicada en modo, tiempo, lugar y circunstancias.

Amén de que, no existe algún medio de prueba alguna que acredite lo externado por el doliente en su queja ni por lo manifestado por el medio de comunicación en su nota periodística.

De esta manera, es importante destacar que, en ambos casos, no se cumplen las premisas de modo tiempo, lugar y circunstancias, dado que:

- *No existe una manifestación lógica jurídica que indique, que camioneta con especificaciones que determinen las características cualitativas de la misma, supuestamente utilizó el C. Antonio García Conejo, candidato a Senador de la República, del estado de Michoacán, postulado por la coalición 'POR MÉXICO AL FRENTE' integrada por los partidos políticos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, en su campaña.*
- *No existe una manifestación lógica jurídica que indique el supuesto recorrido o recorridos realizados por el C. Antonio García Conejo, candidato a Senador de la República, del estado de Michoacán, postulado por la coalición 'POR MÉXICO AL FRENTE' integrada por los partidos políticos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, en alguna de las camionetas objeto materia del supuesto contrato número CAPDE-EM-LPE-021/2017-1.*
- *No existe una manifestación lógica jurídica que indique el periodo en el que supuestamente el C. Antonio García Conejo, candidato a Senador de la República, del estado de Michoacán, postulado por la coalición 'POR MÉXICO AL FRENTE' integrada por los partidos políticos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, utilizó alguna de las camionetas objeto materia del supuesto contrato número CAPDE-EM-LPE-021/2017-1.*
- *No existe prueba con la que se acredite, cuando menos de manera indiciaria que el C. Antonio García Conejo, candidato a Senador de la República, del estado de Michoacán, postulado por la coalición 'POR MÉXICO AL FRENTE'*

integrada por los partidos políticos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, haya utilizado alguna de las camionetas las camionetas objeto materia del supuesto contrato número CAPDE-EM-LPE-021/2017-1.

Pues, la fotografía que utiliza tanto el medio de comunicación en su nota periodística, como el quejoso en su escrito inicial de queja, a simple vista se trata de un fotomontaje, del cual únicamente se desprende la imagen de un vehículo tipo camioneta, del cual no se tiene la certeza real ni jurídica que sea parte de parque vehicular que formó parte del objeto materia del supuesto contrato CAPDE-EM-LPE-021/2017-1, y la imagen montada de quien hacen parecer es el C. Antonio García Conejo, Tripulado dicho vehículo automotor, tal y como se muestra en la imagen fotográfica que a continuación se reproduce para mayor referencia, situación que refuerza aún más la objeción de pruebas que en esta acto se efectúa:

(Imagen)

Por ello, en Buena lógica jurídica, atendiendo a las reglas generales de la valoración de la prueba, la experiencia y la sana crítica, es dable arribar a la conclusión de que la nota periodística utilizada como prueba por el quejoso en el asunto que nos ocupa, no tiene valor ni siquiera indiciario para acreditar la falsa imputación consistente en la utilización de recursos públicos a través de camionetas blindadas contratadas por el Gobierno del estado de Michoacán con la persona moral 'Capital Leasing México S.A. de C.V.', siendo éste un elemento suficiente y bastante para determinar cómo infundado el presente procedimientos sancionador.

Aunado a lo anterior, contrario a lo argumentado por el medio de comunicación 'Id Media' en la nota periodística que utiliza la parte quejosa como documento base de acción en su escrito inicial de queja, en ninguna de las conclusiones sancionatorias, de las que ordenan procedimientos oficiosos o vistas a autoridades electorales, de la RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL RESPECTO DE LA IRREGULARIDADES ENCONTRADAS EN EL DICTAMEN CONSOLIDADO DE LA REVISIÓN DE LOS INFORMES DE INGRESOS Y GASTOS DE LOS CANDIDATOS A LOS CARGOS DE PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, SENADORES Y DIPUTADOS FEDERALES, CORRESPONDIENTE AL PROCESO ELECTORAL FEDERAL ORDINARIO 2017-2018. (PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES Y COALICIONES), identificada con la clave INE/CG/1097/2018, ni del DICTAMEN CONSOLIDADO QUE REPRESENTA LA COMISIÓN DE GISCALIZACIÓN AL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL RESPECTO DE LA REVISIÓN DE LOS INFORMES DE CAMPAÑA DE LOS INGRESOS Y GASTOS DE LOS

CANDIDATOS Y CANDIDATOS INDEPENDIENTES A LOS CARGOS DE PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA MEXICANA, SENADORES Y DIPUTADOS FEDERALES DEL PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2017-2018, marcado con el número INE/CG1095/2018, se sanciona a los partidos integrantes de la coalición 'Por México al Frente', se les sanciona, no se les ordena el inicio de algún procedimiento oficioso, ni se da vista a alguna autoridad electoral con motivo de la utilización de recursos públicos que se denuncian en el asunto que nos ocupa.

Situación con la que se demuestra que la información contenida en la nota periodística que se utiliza como base de acción en el presente procedimiento sancionador, a todas luces es completamente falsa, pues lo cierto es que, en la campaña del C. Antonio García Conejo, candidato a Senador de la República, del estado de Michoacán, postulado por la coalición 'POR MÉXICO AL FRENTE' integrada por los partidos políticos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, NUNCA Y EN NINGÚN MOMENTO, SE UTILIZARON RECURSOS PÚBLICOS NI DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN, NI DE ALGÚN OTRO ENTE GUBERNAMENTAL, FEDERAL O LOCAL, NI EN FORMA QUE INDICA LA PARTE ACTORA, NO EN NINGUNA OTRA, NI A TRAVÉS DE LAS CAMIONETAS QUE SE IMPUTA, NI DE NINGUNA OTRA FORMA.

Con base en todo lo manifestado en el cuerpo del presente escrito de cuenta, atendiendo a las reglas generales de la valoración de la prueba, la experiencia y la sana crítica, es debe concluir que el presente procedimiento en materia de fiscalización, a todas luces es plenamente infundado.

(...)"

IX. Notificación de inicio del procedimiento y emplazamiento al Representante Propietario de Movimiento Ciudadano ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral.

a) El veinte de agosto de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/42227/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó el inicio del procedimiento de mérito y emplazo al Representante Propietario del Partido Movimiento Ciudadano ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, corriéndole traslado con la totalidad de elementos de prueba que integran el escrito de queja. (Fojas 72-74 del expediente).

b) Mediante oficio MC-INE-788/2018 de fecha veintisiete de agosto de dos mil dieciocho, el Representante Propietario del partido, dio respuesta al emplazamiento

que en términos del artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e) del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, en la parte conducente señala: (Fojas 75-79 del expediente).

“(…)

Que de conformidad con lo que establece en los artículos 25, 26, 27, 35 y demás relativo del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral y en atención a su oficio identificado con la clave alfanumérica INE/UTF/DRN/42227/2018, recibido en la oficina que ocupa la Representación de Movimiento Ciudadano el veinte de agosto de la presente anualidad, emitido dentro del expediente que al rubro se indica, por medio del cual se solicita que en un término de cinco días naturales, contados a partir de la fecha en que reciba el oficio, conteste por escrito lo que considere pertinente, exponga lo que su derecho convenga, así como para que ofrezca y exhiba las pruebas que respaldan sus afirmaciones.

Del oficio antes señalado se desprende que nos encontramos ante una queja interpuesta por el C. Juan Antonio Ixtlahuac Orihuela, otrora candidato al Senado por el Partido Revolucionario Institucional, en contra de los CC. Antonio García Conejo y alma Mireya González Sánchez ambos candidatos al Senado de la República por la coalición ‘Por México al Frente’ en Michoacán integrada por los partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano.

En cuanto a lo antes señalado, tal y como se estableció en el convenio de coalición electoral conformado por los partidos políticos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano en cuanto a lo establecido en la cláusula DÉCIMA, que a la letra señala:

(…)

De conformidad con lo establecido en la cláusula antes señalada, así como en los artículos relativos al Reglamento de la Coalición, se colige que en el caso de las candidaturas de las Senadurías y Diputaciones el partido responsable del registro y control del gasto de campaña será el partido que lo postuló, en consecuencia, el partido que ostenta la información solicitada por esa autoridad es el Partido de la Revolución Democrática, al tratarse los hechos denunciados relativos a la candidatura al Senado en el estado de Michoacán, presente requerimiento de información, así como emitir las consideraciones de derecho correspondientes sus alegatos y la documental técnica contable que deberá de acompañar para demostrar su dicho.

Por lo que una vez que esa autoridad realice un estudio de las constancias que obran en el expediente podrán desprender que en el caso de Movimiento Ciudadano ha cumplido con lo establecido en el artículo 25, numeral 1, inciso a) de la Ley General de Partidos Políticos:

(...)”

X. Notificación de inicio del procedimiento y emplazamiento al Representante Propietario del Partido Acción Nacional ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral.

a) El veinte de agosto de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/42228/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó el inicio del procedimiento de mérito y emplazo al Representante Propietario del Partido Acción Nacional ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, corriéndole traslado con la totalidad de elementos de prueba que integran el escrito de queja. (Fojas de la 80 a la 82 del expediente).

b) Mediante oficio RPAN-0839/2018 de fecha tres de septiembre de dos mil dieciocho, el Representante Propietario del partido, dio respuesta al emplazamiento que en términos del artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e) del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, en la parte conducente señala: (Fojas 83-88 del expediente).

“(...)”

Se niega CATEGORICAMENTE las imputaciones realizadas por el C. JUAN ANTONIO IXTLAHUAC ORIHUELA, quien se ostenta como Candidato a Senador de la República.

PRIMERO. LA DENUNCIA DE LA PARTE ACTORA A LA SUPUESTA REALIZACIÓN DE DIVERSOS GASTOS, LOS CUALES, SEGÚN SU PROPIO DICHO, PODRÍAN CONSTITUIR INFRACCIONES A LA NORMATIVIDAD ELECTORAL, EN MATERIA DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS.

De lo anterior, también es importante mencionar que la presente queja que presenta en contra de los ciudadanos Antonio García Conejo y Alma Mireya González candidatos al Senado de la República por la Coalición ‘Por México al frente’, se encuentra fuera de los plazos necesarios, ya que a pesar de los hechos expresados por el denunciante, no son suficientes para acreditar violaciones al mismo, en razón de que las fotos que anexa no se encuentran

certificadas por ninguna autoridad competente, además de que no se ve las placas de dicha camioneta, así mismo menciona el contrato CAPDE-EM-LPE-021/2017-1, contrato de arrendamiento de 9 camionetas blindadas Jeep Grand Cherokee Limited 2016 y una Suburban LTZ 2016, celebrados por el Gobierno de Michoacán, por el simple hecho de ser hermano del candidato, García Conejo, no significa que haya utilizado las camionetas o utilizado recurso público, por tanto que las acusaciones de Juan Antonio Ixtlahuac Orihuela, no acredita sus hechos narrados ya que en la foto que menciona en su queja inicial por tanto carece de credibilidad, ya que nuestra coalición siempre se ha conducido conforme a derecho sin violentar los derechos electorales.

Dicho argumento y petición debe declararse infundada, ya que el mismo se debe realizar una vez que se termine de analizar el Dictamen de fiscalización correspondiente de cada campaña.

Ahora bien, por otro lado, debemos tener en cuenta que el Dictamen de fiscalización es aquel en el cual se muestra si existieron o no irregularidades dentro de los gastos de campaña, además de que los procedimientos especiales en materia de fiscalización, se tiene por entendido que la misma puede ser resuelta hasta el momento del Dictamen; Sirve para robustecer el dicho la siguiente sentencia:

(...)

CONCLUSIONES

Reiteramos que los supuestos agravios por parte denunciante, deben considerarse inoperantes e infundados, ya que desde el momento en que se presentó la queja en cuestión, se nota un vicio en la misma, ya que no presentó la queja en cuestión, se nota un vicio en la misma, ya que no cuenta con ninguna certificación que acredite que dichas fotos, así mismo no prueba que las camionetas rentadas se hayan utilizado para el funcionamiento de la campaña, por lo que se carece de validez, con lo que se demuestra que siempre este Partido Político y los ciudadanos Antonio García Conejo y Alma Mireya González Sánchez candidatos al Senado de la República por la Coalición 'Por México al frente' nos hemos conducido conforme a derecho.

Es por todo lo mencionado en los párrafos anteriores que solicito de la manera más atenta que en el momento procesal oportuno se deseche la Queja en materia de Fiscalización en cuestión, esto por irregularidades en la prueba que sustenta la queja así mismo la frivolidad de la misma queja.

(...)"

XI. Notificación de inicio del procedimiento y emplazamiento a la C. Alma Mireya González Sánchez.

a) El veintidós de agosto de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/VE/1456/2018, la Junta Local Ejecutiva en el estado de Michoacán, notificó el inicio del procedimiento de mérito y emplazo a la C. Alma Mireya González Sánchez, entonces candidata al Senado de la República por la otrora coalición “Por México al Frente” en Michoacán, integrada por los partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano; corriéndole traslado con la totalidad de elementos de prueba que integran el escrito de queja. (Fojas 92-97 del expediente).

b) Mediante oficio INE/UTF/EF-MI/261/18 de fecha veintisiete de agosto de dos mil dieciocho, la C. Alma Mireya González Sánchez, dio respuesta al emplazamiento que en términos del artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e) del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, en la parte conducente señala: (Fojas 104-112 del expediente).

“(…)

Se da contestación a la improcedencia y dolosamente denuncia presentada en contra de los ciudadanos Antonio García Conejo y Alma Mireya González Sánchez candidatos al Senado de la República por la Coalición ‘Por México al frente’ integrada por los partidos Políticos Acción Nacional, Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, por supuestos de violaciones a lo establecido en materia de fiscalización, atribuyendo rebase de tope de gastos de campaña.

Efectivamente, por medio del oficio INE/UTF/DRN/42228/2018, de fecha 20 de agosto de del año en curso, se emplazó al denunciado y en este orden de ideas, debido a que el oficio antes citado y el acuerdo en él transcrito dieron la base para el inicio del procedimiento sancionador en materia de fiscalización electoral, por este conducto se procede a dar contestación en tiempo y forma legal a los hechos y argumentos objeto de la denuncia correspondiente, a razón de los siguiente:

Se niega CATEGORICAMENTE las imputaciones realizadas por el C. JUAN ANTONIO IXTLAHUAC ORIHUELA, quien se ostenta como Candidato a Senador de la República.

PRIMERO: LA DENUNCIA DE LA PARTE ACTORA A LA SUPUESTA REALIZACIÓN DE DIVERSOS GASTOS DE CAMPAÑA, LOS CUALES, SEGÚN SU PROPIO DICHO, PODRÍAN CONSTITUIR INFRACCIONES A LA

NORMATIVIDAD ELECTORAL, EN MATERIA DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS.

De lo anterior, también es importante mencionar que la que presenta en contra de los ciudadanos Antonio García Conejo y Alma Mireya González Sánchez candidatos al Senado de la República por la Coalición 'Por México Al Frente', se encuentra fuera de los plazos necesarios, ya que a pesar de los hechos expresados por el denunciante, no son suficientes para acreditar violaciones al mismo, en razón de que las fotos que anexa no se encuentran certificadas por ninguna autoridad competente, además de que no se las placas de dicha camioneta, así mismo menciona el contrato CAPDE-EM-LPE-021/2017-1, contrato de arrendamiento de 9 camionetas blindadas Jeep Grand Cherokee Limited 2016 y una Suburban LTZ 2016, celebrados por el Gobierno de Michoacán, con la empresa Capital Leasing México, S.A. de C.V. con sede en la ciudad de San Luis Potosí, dicho contrato no encuentra firmado por ninguno de los autorizados, siendo estos alguno de los candidatos de la fórmula en cuestión, los apoderados legales de los partidos políticos que integran dicha coalición o los representantes financieros de alguno de los candidatos en mención, por lo que el Gobernador del Estado de Michoacán, por el simple hechos de ser hermano del candidato, García Conejo, no significa que haya utilizado las camionetas o utilizado recurso público, por tanto que las acusaciones de Juan Antonio Ixtlahuac Orihuela, no acredita sus hechos narrados ya que en la foto que anexa no se tiene certeza de que sea alguna de las camionetas que menciona en su queja inicial por tanto carece de credibilidad, ya que nuestra coalición siempre se ha conducido conforme a derecho sin violentar los derechos electoral.

Así mismo es importante señalar que todos y cada uno de los gastos realizados en el periodo de campaña, están debidamente registrados dentro de mi contabilidad, tal y como lo demuestro con la balanza de comprobación, en donde se puede apreciar que en ningún momento se realizó un gasto por alguno de los vehículos de los cuales se duele la parte actora.

Ahora bien, por otro lado, debemos tener en cuenta que el Dictamen de fiscalización es aquel en el cual se muestra si existieron o no irregularidades dentro de los gastos de campaña, además de que los procedimientos especiales en materia de fiscalización, se tiene por entendido que la misma puede ser resuelta hasta el momento del Dictamen; Sirve para robustecer el dicho de la siguiente sentencia:

(...)

CONCLUSIONES

Reiteramos que los supuestos agravios por la parte denunciante, deben considerarse inoperantes e infundados, ya que desde el momento en que se presentó la queja en cuestión, se nota un vicio en la misma, ya que no cuenta con ninguna certificación que acredite que dichas fotos, así mismo no prueba que las camioneta arrendadas fueran rentadas por alguno de los autorizados con el fin de que ella fueran objeto de la campaña electoral de la fórmula de senadores en cuestión, por lo que se carece de valides, con lo que se demuestra que siempre me conduje conforme a derecho.

*Es por todo lo mencionado en los párrafos anteriores que solicito de la manera más atenta que en el momento procesal oportuno se deseche la Queja en materia de Fiscalización en cuestión interpuesta por el C. Juan Antonio Ixtlahuac Orihuela, esto por irregularidades en la prueba que sustenta la queja así mismo la frivolidad de la misma queja.
(...)”*

XII. Notificación de inicio del procedimiento y emplazamiento al C. Antonio García Conejo.

a) El veintidós de agosto de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/VE/1457/2018, la Junta Local Ejecutiva en el estado de Michoacán, notificó el inicio del procedimiento de mérito y emplazo al C. Antonio García Conejo, candidato al Senado de la República por la Coalición “Por México al Frente” en Michoacán, integrada por los partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano; corriéndole traslado con la totalidad de elementos de prueba que integran el escrito de queja. (Fojas 98-103 del expediente).

b) Mediante oficio INE/UTF/EF-MI/261/18 de fecha veintisiete de agosto de dos mil dieciocho, el C. Antonio García Conejo, dio respuesta al emplazamiento que en términos del artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e) del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, en la parte conducente señala: (Fojas 113-127 del expediente).

“(...)”

A objeto de la queja se contesta:

Que es incongruente el objeto de la supuesta queja que presenta por propio derecho del ciudadano Juan Antonio Ixtláhuac Orihuela, toda vez que si bien afirma que el propósito de su escrito es demostrar que la campaña ‘...costó más de lo reportaron a esta autoridad electoral...’ la idea toral de sus

argumentos se centra en demostrar el uso de recursos públicos, en concreto en el uso de vehículos al servicio del Gobierno del Estado de Michoacán a favor de la candidatura al Senado de la República por el principio de Mayoría Relativa del Estado de Michoacán formada por los ciudadanos ANTONIO GARCÍA CONEJO y ALMA MIREYA GONZÁLEZ SÁNCHEZ más no el exceso en los gastos de campaña. De ahí que no sea congruente que en primer término acuse de exceso en el gasto y que sólo argumente respecto del uso de sus servicios o bienes públicos. Lo que convierte a su queja en oscura por su imprecisión.

A los hechos en su orden se contesta:

En término, no debe pasar por desapercibido de esa Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral que, lo manifestado por el denunciante en su escrito de queja, es completamente oscuro, impreciso y por demás infundado, dado que las acusaciones vertidas a todas luces son genéricas, vagas e imprecisas, puesto que no se encuentra ubicada en modo, tiempo, lugar y circunstancias.

Lo anterior es así, pues al margen de que los argumentos del quejoso se basan en la lectura de una nota periodística, circunstancia que se desarrollará en líneas posteriores, lo cierto es que jamás acredita que las supuestas camionetas a que se refiere el contrato de arrendamiento CADPE-EM-LPE-021/2017-1 sean las mismas que fueron utilizadas en campaña por la fórmula de la Coalición 'Por México al Frente' por los ciudadanos ANTONIO GARCÍA CONEJO y ALMA MIREYA GONZÁLEZ SÁNCHEZ. Es decir, no existe mención alguna que vincule a los diversos automotores que se refiere dicho contrato con aquellos que fueron registrados en el Sistema Integral de Fiscalización de la campaña, y, por ende, tampoco existe ningún medio de convicción que avale la relación entre los dichos de la nota periodística, los razonamientos del quejoso y los registros validados por la autoridad fiscalizadora electoral.

Bajo este sustento, es pertinente que esta Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, tenga presente el criterio sustentado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en las siguientes jurisprudencias:

(...)

Bajo estas premisas, en el asunto que nos ocupa, los hechos denunciados a todas luces deviene a ser infundados dado que no se encuentran soportados en medios de prueba idóneos para acreditar los extremos de la acusación, además de que la narrativa vertida por la parte quejosa, en todo momento son

vagos, imprecisos, y genéricos, puesto que no se expresan de manera clara y precisa las circunstancias de modo, tiempo y lugar que hagan verosímil la versión de los hechos denunciados, premisas necesarias que proporcionan los elementos indispensables para establecer la posibilidad de que los actos que se denuncian, efectivamente hayan ocurrido, puesto que son el objeto esencial y principal de un conjunto de exigencias para garantizar la gravedad y seriedad de los motivos de la queja, del inicio del procedimiento sancionador en que se actúa, y primordiales para justificar que la autoridad entre acción y realice las primeras investigaciones, así como la posible afectación a terceros, al proceder a recabar los elementos necesarios para la satisfacción de su cometido.

En otras palabras, los argumentos vertidos por el quejoso no exponen la razón de la afectación de derechos de manera cierta y evidente, pues parte de premisas falsas para arribar a una conclusión igual. En este sentido, la Corte ha determinado en la jurisprudencia 2ª./J. 108/2012, que los agravios cuya construcción parte de premisas falsas son inoperantes, ya que a ningún fin práctico conduciría su análisis y calificación, pues al partir de una suposición que no resultó verdadera, su conclusión resulta ineficaz para obtener la restitución de algún derecho. Y en este caso, no existe medio probatorio alguno que sustente los supuestos hechos que integran su queja, en consecuencia, no existe medio probatorio alguno que sustente los supuestos hechos que integran su queja, en consecuencia, no existe un vínculo creíble, ni confiable de sus afirmaciones con el derecho que supuestamente alega vulnerado.

En este orden de ideas, como es de verdad sabida y de derecho explorado, si de los hechos narrados no existe la apariencia de ser verdaderos o creíbles, de acuerdo a la forma natural de ser de las cosas, al encontrarse caracteres de falsedad o irrealidad dentro del relato, no se encuentra justificación racional poner en obra a una autoridad, para averiguar hechos carente de verosimilitud dentro de cierta realidad en la conciencia general de los miembros de la sociedad, de tal manera, que cuando se denuncien hechos que no se encuentren ubicados en modo tiempo, lugar y circunstancias, dichas acusaciones a todas luces se encuentran cubiertas de falta de credibilidad.

Es por ello que, en todo procedimiento sancionador se deben observar todos los principios de derecho, entre los cuales se encuentra el relativo a que las quejas, denuncias presentadas y procedimientos sancionadores que inicien, que puedan constituir infracciones a la normatividad electoral, deben estar sustentadas, en hechos claros y preciso en los cuales se expliquen las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se verificaron y aportar por lo menos un mínimo de material probatorio a fin de que la autoridad administrativa electoral esté en aptitud de determinar si existe indicios que

conduzcan a iniciar su facultad investigadora , pues la omisión de alguna de estas exigencias básicas no es apta para instar el ejercicio de tal atribución y como consecuencia el procedimiento iniciado con motivo de la queja o denuncia debe ser declarado como infundado.

Bajo esta cadena argumentativa, el asunto que nos ocupa, al no encontrarse ubicados los hechos denunciados en modo, tiempo ligar y circunstancias, es dable que esa Unidad Técnica de Fiscalización determine como infundado el presente procedimiento especial sancionador en materia de fiscalización.

Aguando a lo anterior, es importante destacar que toda la imputación que vierte el quejoso en el asunto que nos ocupa, es completamente falsa dado que NUNCA SE UTILIZARON RECURSOS PÚBLICOS QUE INDICA LA PARTE ACTORA, NI A TRAVÉS DE LAS CAMIONETAS QUE MENCIONA, NI DE NINGUNA OTRA FORMA.

En este sentido, no pasa por desapercibido que la actora para acreditar los extremos de su imputación, ofrece como prueba el contenido de la nota periodística contenida en la página de internet <https://www.idimedia.com/investigaciones-disruptivas/gasta-gobierno-de-michoacan-63-mdp-en-arrendamiento-de-camionetas-blindadas/> , del medio de comunicación 'Id Media', misma que desde este momento SE OBJETA EN TODO SU CONTENIDO, ALCANCE Y VALOR PROBATORIO QUE SE LE PRETENDA DAR, en virtud de que, si bien es cierto, en dicha nota periodística, titulada como 'Gasta Gobierno de Michoacán 63 mdp en arrendamiento de camionetas blindadas', se indica que '...al igual que el senador electo del PRD, Antonio García Conejo, a quienes se les podrían incrementar los gastos de tope de campaña por la utilización de estos vehículos propiedad del estado y por el consumo de insumos como gasolina.', y se exhibe parte del contrato número CAPDER-EM-LPE-021/2017-1, a través del cual, pasado 7 de julio de 2017 el Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo del estado de Michoacán, suscribió con la empresa 'Capital Leasing México S.A. de C.V', con sede en San Luis Potosí, para la renta de nueve vehículos blindados, con un costo total de más de 63 millones de pesos.

También lo es que, no existe prueba alguna mediante la cual, se acredite la veracidad de lo publicado en la nota periodística en comento y como consecuencia de lo aseverado por el quejoso en el asunto que nos ocupa.

En este sentido, la imputación vertida en el asunto que nos ocupa, así como externado en por el medio de comunicación 'Id Media' en la nota periodística antes descrita, a todas luces resulta ser vaga, imprecisa, oscura e improcedente, dado que no se encuentra ubicada en modo, tiempo, lugar y circunstancias.

Amén de que, no existe algún medio de prueba alguna que acredite lo externado por el doliente en su queja ni por lo manifestado por el medio de comunicación en su nota periodística.

De esta manera, es importante destacar que, en ambos casos, no se cumplen las premisas de modo tiempo, lugar y circunstancias, dado que:

- No existe una manifestación lógica jurídica que indique, que camioneta con especificaciones que determinen las características cualitativas de la misma, supuestamente utilizó el C. Antonio García Conejo, candidato a Senador de la República, del estado de Michoacán, postulado por la coalición 'POR MÉXICO AL FRENTE' integrada por los partidos políticos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, en su campaña.*
- No existe una manifestación lógica jurídica que indique el supuesto recorrido o recorridos realizados por el C. Antonio García Conejo, CANDIDATO A Senador de la República, del estado de Michoacán, postulado por la coalición 'POR MÉXICO AL FRENTE' integrada por los partidos políticos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, en alguna de las camionetas objeto materia del supuesto contrato número CAPDE-EM-LPE-021/2017-1.*
- No existe una manifestación lógica jurídica que indique el periodo en el que supuestamente el C. Antonio García Conejo, candidato a Senador de la República, del estado de Michoacán, postulado por la coalición 'POR MÉXICO AL FRENTE' integrada por los partidos políticos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, utilizó alguna de las camionetas objeto materia del supuesto contrato número CAPDE-EM-LPE-021/2017-1.*
- No existe prueba con la que se acredite, cuando menos de manera indiciaria que el C. Antonio García Conejo, candidato a Senador de la República, del estado de Michoacán, postulado por la coalición 'POR MÉXICO AL FRENTE' integrada por los partidos políticos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, haya utilizado alguna de las camionetas las camionetas objeto materia del supuesto contrato número CAPDE-EM-LPE-021/2017-1.*

Pues, la fotografía que utiliza tanto el medio de comunicación en su nota periodística, como el quejoso en su escrito inicial de queja, a simple vista se trata de un fotomontaje, del cual únicamente se desprende la imagen de un vehículo tipo camioneta, del cual no se tiene la certeza real ni jurídica que sea

parte de parque vehicular que formó parte del objeto materia del supuesto contrato CAPDE-EM-LPE-021/2017-1, y la imagen montada de quien hacen parecer es el C. Antonio García Conejo, Tripulado dicho vehículo automotor, tal y como se muestra en la imagen fotográfica que a continuación se reproduce para mayor referencia, situación que refuerza aún más la objeción de pruebas que en esta acto se efectúa:

(Imagen)

Por ello, en Buena lógica jurídica, atendiendo a las reglas generales de la valoración de la prueba, la experiencia y la sana crítica, es dable arribar a la conclusión de que la nota periodística utilizada como prueba por el quejoso en el asunto que nos ocupa, no tiene valor ni siquiera indiciario para acreditar la falsa imputación consistente en la utilización de recursos públicos a través de camionetas blindadas contratadas por el Gobierno del estado de Michoacán con la persona moral 'Capital Leasing México S.A. de C.V.', siendo éste un elemento suficiente y bastante para determinar cómo infundado el presente procedimientos sancionador.

Aunado a lo anterior, contrario a lo argumentado por el medio de comunicación 'Id Media' en la nota periodística que utiliza la parte quejosa como documento base de acción en su escrito inicial de queja, en ninguna de las conclusiones sancionatorias, de las que ordenan procedimientos oficiosos o vistas a autoridades electorales, de la RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL RESPECTO DE LA IRREGULARIDADES ENCONTRADAS EN EL DICTAMEN CONSOLIDADO DE LA REVISIÓN DE LOS INFORMES DE INGRESOS Y GASTOS DE LOS CANDIDATOS A LOS CARGOS DE PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, SENADORES Y DIPUTADOS FEDERALES, CORRESPONDIENTE AL PROCESO ELECTORAL FEDERAL ORDINARIO 2017-2018.

(PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES Y COALICIONES), identificada con la clave INE/CG/1097/2018, ni del DICTAMEN CONSOLIDADO QUE REPRESENTA LA COMISIÓN DE GISCALIZACIÓN AL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL RESPECTO DE LA REVISIÓN DE LOS INFORMES DE CAMPAÑA DE LOS INGRESOS Y GASTOS DE LOS CANDIDATOS Y CANDIDATOS INDEPENDIENTES A LOS CARGOS DE PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA MEXICANA, SENADORES Y DIPUTADOS FEDERALES DEL PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2017-2018, marcado con el número INE/CG/1095/2018, se sanciona a los partidos integrantes de la coalición 'Por México al Frente', se les sanciona, no se les ordena el inicio de algún procedimiento oficioso, ni se da vista a alguna autoridad electoral con motivo de la utilización de recursos públicos que se denuncian en el asunto que nos ocupa.

Situación con la que se demuestra que la información contenida en la nota periodística que se utiliza como base de acción en el presente procedimiento sancionador, a todas luces es completamente falsa, pues lo cierto es que, en la campaña del C. Antonio García Conejo, candidato a Senador de la República, del estado de Michoacán, postulado por la coalición 'POR MÉXICO AL FRENTE' integrada por los partidos políticos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, NUNCA Y EN NINGÚN MOMENTO, SE UTILIZARON RECURSOS PÚBLICOS NI DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN, NI DE ALGÚN OTRO ENTE GUBERNAMENTAL, FEDERAL O LOCAL, NI EN FORMA QUE INDICA LA PARTE ACTORA, NO EN NINGUNA OTRA, NI A TRAVÉS DE LAS CAMIONETAS QUE SE IMPURA, NI DE NINGUNA OTRA FORMA.

*Con base en todo lo manifestado en el cuerpo del presente escrito de cuenta, atendiendo a las reglas generales de la valoración de la prueba, la experiencia y la sana crítica, es debe concluir que el presente procedimiento en materia de fiscalización, a todas luces es plenamente infundado.
(...)"*

XIII. Razón y constancia. El cuatro de septiembre de dos mil dieciocho, el titular de la Unidad Técnica de Fiscalización levantó razón y constancia a efecto de realizar la una consulta en la red social Facebook con la URL https://www.facebook.com/pg/antonio.garciaconejo.PRD/photos/?ref=page_internal, con la intención de integrar al procedimiento citado al rubro, en medio magnético que se agrega como apéndice al presente Acuerdo, las evidencias fotográficas que obran dentro de dicha plataforma, consistentes en fotografías presentadas en el perfil del otrora candidato, el C. Antonio García Conejo, candidato al Senado de la República por el estado de Michoacán, postulados por la coalición "Por Michoacán Al Frente" integrada por los partidos políticos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano. (Fojas 128-129 del expediente).

XIV. Requerimiento de información a la C. Alma Mireya González Sánchez.

a) El diecinueve de septiembre de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/VE/1514/2018, la Junta Local Ejecutiva en el estado de Michoacán, notificó el requerimiento de información a la C. Alma Mireya González Sánchez, otrora candidata al Senado de la República por la Coalición "Por México al Frente" en Michoacán, integrada por los partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano; a efecto de solicitar que la misma exhiba las pruebas que

respalden sus afirmaciones y en su caso, presente la documentación al respecto. (Fojas 134-141 del expediente).

b) A la fecha de elaboración de la presente, la Unidad Técnica de Fiscalización no ha recibido respuesta al requerimiento de mérito.

XV. Requerimiento de información al C. Antonio García Conejo.

a) El diecinueve de septiembre de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/VE/1515/2018, la Junta Local Ejecutiva en el estado de Michoacán, notificó el requerimiento de información al C. Antonio García Conejo, otrora candidato al Senado de la República por la Coalición “Por México al Frente” en Michoacán, integrada por los partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano; a efecto de solicitar que la misma exhiba las pruebas que respalden sus afirmaciones y en su caso, presente la documentación al respecto. (Fojas de la 142 a la 151 del expediente).

b) Mediante oficio de fecha veintisiete de septiembre de dos mil dieciocho, el C. Antonio García Conejo, dio respuesta al requerimiento en los siguientes términos: (Fojas 153-193 del expediente).

“ (...)

1. *Niego lisa y llanamente que el suscrito hubiera utilizado camionetas blindadas durante el periodo de campaña.*

2. *Niego además que las pruebas, señalamientos y acusaciones que realizan el quejoso en su escrito de queja, se refieran vehículos que el suscrito no especifica las características y número de serie del vehículo que dice utilice durante el periodo de elecciones, no acredita con medio de convicción alguno que en efecto hubiera utilizado dichos vehículos.*

3. *Los vehículos que en realidad se utilizaron fueron debidamente relacionados y registrados en el Sistema de Fiscalización.*

(...)”

XVI. Solicitud de información al Secretario de Finanzas y Administración del estado de Michoacán.

a) El diecinueve de septiembre de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/VE/1513/2018, la Junta Local Ejecutiva en el estado de Michoacán, notificó la solicitud de información al Secretario de Finanzas y Administración del estado de Michoacán; a efecto de confirmar o rectificara la veracidad de las afirmaciones imputadas a esa dependencia por el quejoso, y en su caso, presenta la

documentación que considerara pertinente para aclarar los hechos materia de investigación. (Fojas de la 194 a la 201 del expediente).

b) Mediante oficio DGJ/DC/5107/2018 de fecha veintiuno de septiembre de dos mil dieciocho, el C. Carlos Maldonado Mendoza, Secretario de Finanzas y Administración del estado de Michoacán, dio respuesta a la solicitud de información en los siguientes términos: (Fojas 203-232 del expediente).

“(...) Se anexa al presente oficio, copia simple del contrato con la clave alfanumérica CADPE-EM-LPE-021/2017-1 (...) Se niega que los vehículos descritos en el contrato descrito en el párrafo que antecede, se hubieran encontrado en resguardo de los CC. ANTONIO GARCIA CORNEJO y ALMA MIREYA GONZÁLEZ SÁNCHEZ (...)”

XVII. Solicitud de información a la Dirección del Secretariado de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral.

a) El seis de septiembre de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/1263/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó a la citada Dirección que se realizará la certificación de la URL´s que se describe a continuación <https://www.idimedia.com/investigaciones-disruptivas/gasta-gobierno-de-michoacan-63-mdp-en-arrendamiento-de-camionetas-blindadas/>. (Fojas 233-234 del expediente).

b) El siete de septiembre de dos mil dieciocho, mediante oficio número INE/DS/OE/595/2018, la Dirección del Secretariado de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, dio contestación al oficio descrito en el inciso anterior; realizando la certificación del vínculo de internet citado previamente. (Fojas 235-241 del expediente).

XVIII. Solicitud de información a la Dirección de Auditoría de Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros (en adelante Dirección de Auditoría).

a) El seis de septiembre de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/1261/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó a la citada Dirección que informara si existe registro en el Sistema Integral de Fiscalización de gasto de campaña denunciado consistente en transportación en camionetas blindadas. (Foja 242 del expediente).

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/692/2018

b) El diez de septiembre de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DA/43600/2018, la Dirección de Auditoría, dio contestación al oficio descrito en el inciso anterior, manifestando lo siguiente: (Fojas 249-250 del expediente).

“(…)

Sobre el particular, se comunica que tomando en consideración el fondo de su solicitud de información en cuanto a la utilización de camionetas blindadas, no se precisa de manera clara los nombres de los candidatos del PRD, sin embargo, por lo que corresponde al entonces candidato C. Antonio García Conejo le informo lo siguiente:

(…)”

En cuanto hace al C. Antonio García Conejo la información localizada en el SIF correspondiente al uso y goce temporal de dos camionetas de modelo 2018, se envió adjunta al oficio de esta Dirección con número INE/UTF/DA/43601/2018 la información en medio óptico [CD].

(…)”

c) El seis de septiembre de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/1262/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó a la citada Dirección que informara si existe registro en el Sistema Integral de Fiscalización de gastos en transportación en camionetas blindadas, rotulado y/o estampado en camionetas con propaganda, parte de los otrora candidatos los CC. Antonio García Cornejo y Alma Mireya González Sánchez, ambos candidatos al Senado de la República por parte de la otrora coalición denunciada. (Fojas 243-244 del expediente).

d) El diez de septiembre de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DA/43600/2018, la Dirección de Auditoría, dio contestación al oficio descrito en el inciso anterior, manifestando lo siguiente: (Fojas 245-246 del expediente).

“(…)”

Sobre el particular, se comunica que derivado de la búsqueda en los archivos cargados por la coalición ‘Por México al Frente’, así como a las contabilidades de los CC. Antonio García Conejo y Alma Mireya González Sánchez, que obran en el Sistema Integral de Fiscalización correspondientes al periodo de campaña, únicamente se advirtieron registros a cargo del C. Antonio García Conejo, los cuales se adjunta en medio óptico [CD], mismos que contiene documentación relacionada con la utilización de transporte, así como con el rotulado y/o estampado de características señaladas en su oficio y anexos.

(…)”

XIX. Vista a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, atendiendo la solicitud de la parte quejosa. El seis de septiembre de dos mil dieciocho, mediante el oficio INE/UTF/DRN/43369/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización, envió informe a la referida Fiscalía, para que en ejercicio de sus facultades tenga a bien determinar; si los hechos narrados por el quejoso, pudieran constituir controversia respecto de las reglas de la contienda electoral en el marco del Proceso Electoral Federal. Consistentes ha dicho del quejoso; en gastos no reportados, así como la utilidad de recursos públicos para la campaña de C. Antonio García Conejo. (Fojas 247-248 del expediente).

XX. Requerimiento de información al Representante y/o Apoderado legal de la empresa denominada Capital Leasing México S.A. de C.V.

a) El trece de septiembre de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización, requirió a la citada empresa, a efecto de que informará si CC. Antonio García Cornejo y Alma Mireya González Sánchez, ambos otroras candidatos al Senado de la República, así como los partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano que integraron la otrora Coalición “Por México al Frente” en Michoacán, contrataron con la empresa que usted representa el arrendamiento de 9 camionetas blindadas de la marca Jeep Grand Cherokee Limited, modelo 2016, así como de una camioneta de la marca Suburban LTZ, modelo 2016; asimismo, precisara si el pago de cada prestación o servicio se realizó en una sola exhibición o en varios pagos, indicando el monto y forma de pago de las operaciones; finalmente se solicitó remitiera el contrato con la clave alfanumérica CAPDE-EM-LPE-021/2017-1, celebrado entre la empresa citada y la Secretaría de Finanzas del Estado de Michoacán; las facturas, y se precisará la fecha de celebración, objeto y destino del contrato respectivo, así como toda aquella documentación que acredite su dicho. (Fojas 251-256 del expediente).

b) El catorce de septiembre de dos mil dieciocho, mediante oficio sin número, la referida empresa dio respuesta al oficio descrito en el inciso anterior, manifestando lo siguiente: (Fojas 257-315 del expediente).

“(…)”

1.- ‘Si los CC. Antonio García Cornejo y Alma Mireya González Sánchez, ambos otroras candidatos al Senado de la República, así como los partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano que integraron la otrora Coalición ‘Por México al Frente’ en Michoacán, contrataron con la empresa que usted representa el arrendamiento de 9 camionetas blindadas de la marca Jeep Grand Cherokee Limited, modelo 2016, así como de una camioneta de la marca Suburban LTZ, modelo, en caso de ser

afirmativa la respuesta, se solicita presente el contrato, así como las facturas y muestras de cada uno de los gastos por concepto de arrendamiento de las referidas camionetas.'

Respuesta: Bajo protesta de decir verdad, informo a Usted que mí representada Capital Leasing México, S.A. de C.V., NO ha celebrado contrato de arrendamiento alguno con los CC. Antonio García Cornejo y Alma Mireya González Sánchez.

2.- 'Precise si el pago de cada prestación o servicio se realizó en una sola exhibición o en varios pagos, indicando el monto y forma de pago de las operaciones, especificando:

- a) La fecha de todos y cada uno de los pagos efectuados, relacionando los mismos con el bien o servicio prestado.*
- b) Si el monto fue pagado en efectivo, con cheque o a través de transferencia interbancaria.*
- c) En caso de haber sido realizado mediante cheque, remita copia del título de crédito correspondiente.*
- d) Si fue pagado en efectivo, deberá señalar la razón social del banco y el número de cuenta en la que se depositó el pago referido; así como la denominación de la institución bancaria de origen, anexando copia del depósito correspondiente.*
- e) Si se realizó el pago a través de transferencia interbancaria electrónica, debe señalar el banco y número de cuenta origen, los datos de la transferencia; así como el nombre del titular de la cuenta de destino, así como la institución bancaria y número de cuenta del mismo; adjuntando copia de la documentación que soporte la realización de dicha transferencia.*
- f) Si hubiese sido mediante tarjeta de crédito, indique los datos de la operación.*
- g) En caso de tener cantidades pendientes de pago, señale el motivo, monto y la fecha de vencimiento.'*

Respuesta: No aplica, toda vez que mí representado NO ha celebrado contrato de arrendamiento alguno con los CC. Antonio García Cornejo y Alma Mireya González Sánchez.

3.- 'Por otra parte, se solicita que remita el contrato con la clave alfanumérica CAPDE-EM-LPE-021/2017-1, celebrado entre la empresa que usted representa empresa y la Secretaría de Finanzas del Estado de Michoacán; así como las facturas, precisando la fecha de celebración, objeto y destino del contrato respectivo, así como toda aquella documentación que acredite su dicho; haciendo mención en lo establecido en el punto 2 de este mismo oficio.'

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/692/2018

Respuesta: Se anexa a la presente copia simple del Contrato de Arrendamiento Puro de Camionetas Blindadas por Licitación Pública Estatal Número CADPE-EM-LPE-021/2017-1, que celebró el 07 de julio de 2017, manifestando, bajo protesta de decir verdad, que dicha copia simple corresponde efectivamente al Contrato de Arrendamiento Puro de que se trata.

*De conformidad con lo que se estableció en la cláusula primera del citado instrumento jurídico, su objeto y destino consistió en que el Arrendamiento [Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno de Michoacán] se obligó a contratar con el Arrendador (Capital Leasing México, S.A. de C.V) el servicio de arrendamiento puro de camionetas blindadas que se detallaron en la orden de pedido número LPE-021/2017-1 de fecha 7 de julio de 2017, así como en el Anexo I del contrato.
(...)"*

c) El veintidós de febrero de dos mil diecinueve, la Unidad Técnica de Fiscalización, requirió nuevamente al Representante y/o Apoderado legal de la empresa denominada Capital Leasing México S.A. de C.V., a efecto de que informará si la camioneta marca Jeep, Grand Cherokee, Limited 3.6L, V6, V7P, 4X2, Automática-, con placas de circulación PGA51217, era propiedad de dicha empresa, si se encontraba dentro sus bienes o activo o si bien la misma había formado parte de algún contrato de arrendamiento vehicular que hubiera celebrado con el gobierno del estado de Michoacán o con alguna otra persona física o moral, y de ser el caso, señalará con quien celebro dicho contrato y remitiera la información y documentación soporte correspondiente. (Fojas 350-353 del expediente)

d) El veintinueve de marzo del dos mil diecinueve mediante escrito sin número, la referida persona moral dio respuesta al oficio descrito en el inciso anterior, manifestando lo siguiente: (Fojas 354-355 del expediente)

"(...)

1.- 'Si la empresa Capital Leasing México S.A. de C.V, es propietaria del Vehículo Jeep, Grand Cherokee, Limited 3.6L, V6, V7P, 4X2, Automática, placas de circulación PGA51217, de ser el caso, remita la documentación que acredite dicha propiedad.

Respuesta: Bajo protesta de decir verdad, informo a Usted que mí representada Capital Leasing México, S.A. de C.V., NO es propietaria del Vehículo Jeep, Grand Cherokee, Limited 3.6L, V6, V7P, 4X2, Automática, placas de circulación PGA51217.

2.- *‘Si derivado de los bienes y/o servicios que presta la empresa Capital Leasing México S.A. de C.V, se encuentra dentro de sus bienes y/o activos algún automóvil con placas PGA51217.*

Respuesta: Bajo protesta de decir verdad, informo a Usted que dentro de los activos y bienes de mi representada NO se localizó ningún automóvil con placas de circulación PGA51217.

3.- *‘Si la empresa Capital Leasing México S.A. de C.V, durante los años 2017 y 2018, celebró algún contrato de arrendamiento vehicular con el gobierno del estado de Michoacán o con alguna otra persona física o moral, en el cual hubiera sido objeto el automotor Jeep, Grand Cherokee, Limited 3.6L, V6, V7P, 4X2, Automática, placas de circulación PGA51217, de ser el caso, remita la documentación que acredite su respuesta.*

Respuesta: Bajo protesta de decir verdad, informo a Usted que mi representada Capital Leasing México, S.A. de C.V., NO ha celebrado ni celebró ningún contrato en cual haya tenido por objeto el Vehículo Jeep, Grand Cherokee, Limited 3.6L, V6, V7P, 4X2, Automática, placas de circulación PGA51217.

4.- *‘Si el C. José Carlos Guzmán Grajeda, es propietario de la empresa Capital Leasing México S.A. de C.V o forma parte del algún órgano directivo o administrativo de la misma, o en su caso sí el referido ciudadano es empleado de su representada.*

Respuesta: Bajo protesta de decir verdad, informo a Usted que el C. José Carlos Guzmán Grajeda, no es propietario de la empresa Capital Leasing México S.A. de C.V ni forma parte del ninguno de sus órganos, así mismo se niega la existencia de cualquier relación laboral entre él y mi representada.

(...)

Asimismo, mi representada niega tener conocimiento del vehículo del cual se requiere información, al no coincidir sus características físicas con ninguna que se tenga en plantilla.”

XXI. Requerimiento de información a la Secretaria del Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Territorial del estado de Michoacán

a) Mediante oficio INE/VE/1589/2018, Unidad Técnica de Fiscalización, a través de la Junta Local Ejecutiva del estado de Michoacán, solicito a la Secretaria del Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Territorial del estado de Michoacán, enviara

la información relativa a los datos de los propietarios o en su caso de las personas físicas o morales que hubieran llevado a cabo el trámite de emplacamiento de tres vehículos de la marca Grand Cherokee Limityed 2016 placas de circulación PGB-563-T, 3YW-44 y PFT-430-T.

b) El quince de noviembre de dos mil dieciocho, mediante oficio con número de expediente SEMACDET/AS/154/2018, la referida Secretaria dio respuesta al oficio descrito en el inciso anterior, manifestando que no tenía datos relacionados a las placas señaladas derivado de que las mismas no correspondían a esa entidad

XXII. Acuerdo de Alegatos.

a) El veintiséis de septiembre de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización estimó procedente abrir la etapa de alegatos correspondiente, por lo cual se ordenó notificar al quejoso y a los sujetos incoados, para que en un plazo de setenta y dos horas manifestaran por escrito los alegatos que consideran convenientes. (Foja 316 del expediente).

b) El veintisiete de septiembre de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/44097/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó al Representante Propietario del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, manifestara por escrito los alegatos que considera convenientes, en virtud del acuerdo emitido por esta autoridad que declaró abierta la etapa de alegatos en el procedimiento al rubro indicado. (Fojas 340-341 del expediente).

c) El Representante Propietario del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo General Electoral del Instituto Nacional Electoral, no desahogo el requerimiento descrito en el inciso anterior.

d) El veintisiete de septiembre de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/44096/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó al Representante Propietario del Partido de la Revolución Democrática ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, manifestara por escrito los alegatos que considera convenientes, en virtud del acuerdo emitido por esta autoridad que declaró abierta la etapa de alegatos en el procedimiento al rubro indicado. (Fojas 330-331 del expediente).

e) Mediante oficio de fecha veintiocho de septiembre de dos mil dieciocho, el Representante Propietario del Partido de la Revolución Democrática ante el Consejo

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/692/2018

General Electoral del Instituto Nacional Electoral, desahogo el requerimiento descrito en el inciso anterior, manifestando lo siguiente: (Fojas 333-339 del expediente).

“(…)

Nunca y en ningún momento, se utilizaron recursos públicos ni del Gobierno del Estado de Michoacán, ni de algún otro ente gubernamental, federal o local, ni en la forma que indica la parte actora, no en ninguna otra, ni a través de las camionetas que se imputa, ni de ninguna otra forma.

(…)”

f) El veintisiete de septiembre de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/44094/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó al Representante Propietario del Partido Movimiento Ciudadano ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, manifestara por escrito los alegatos que considera convenientes, en virtud del acuerdo emitido por esta autoridad que declaró abierta la etapa de alegatos en el procedimiento al rubro indicado. (Fojas 320-321 del expediente).

g) Mediante oficio MC-INE-838/2018, de fecha veintiocho de septiembre de dos mil dieciocho, el Representante Propietario del Partido Movimiento ante el Consejo General Electoral del Instituto Nacional Electoral, desahogo el requerimiento descrito en el inciso anterior, manifestando lo siguiente: (Fojas 322-327 del expediente).

“(…)”

De las constancias que obran en el expediente no acreditan de forma alguna que Movimiento Ciudadano haya llevado a cabo conductas contrarias a lo preceptuado en la Legislación Electoral aplicable en su momento

(…)”

h) El veintisiete de septiembre de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/44095/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó al Representante Propietario del Propietario del Partido Acción Nacional ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, manifestara por escrito los alegatos que considera convenientes, en virtud del acuerdo emitido por esta autoridad que declaró abierta la etapa de alegatos en el procedimiento al rubro indicado. (Fojas 328-329 del expediente).

i) El Representante Propietario del Partido Acción Nacional ante el Consejo General Electoral del Instituto Nacional Electoral, no desahogo el requerimiento descrito en el inciso anterior.

j) El veintiocho de septiembre de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/VE/1517/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó a la C. Alama Mireya González Sánchez, otrora candidata al Senado de la República por la Coalición “Por México al Frente” en Michoacán, manifestara por escrito los alegatos que considera convenientes, en virtud del acuerdo emitido por esta autoridad que declaró abierta la etapa de alegatos en el procedimiento al rubro indicado. (Fojas 349-353 del expediente).

k) La C. Alama Mireya González Sánchez, otrora candidata al Senado de la República por la Coalición “Por México al Frente” en Michoacán, no desahogo el requerimiento descrito en el inciso anterior.

l) El veintiocho de septiembre de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/VE/1518/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó al C. Antonio García Conejo, otrora candidato al Senado de la República por la Coalición “Por México al Frente” en Michoacán, manifestara por escrito los alegatos que considera convenientes, en virtud del acuerdo emitido por esta autoridad que declaró abierta la etapa de alegatos en el procedimiento al rubro indicado. (Fojas 344-348 del expediente).

m) El C. Antonio García Conejo, otrora candidato al Senado de la República por la Coalición “Por México al Frente” en Michoacán, no desahogo el requerimiento descrito en el inciso anterior.

XXIII. Cierre de instrucción. El quince de mayo de dos mil diecinueve, la Unidad Técnica de Fiscalización emitió el Acuerdo por el que se declaró cerrada la instrucción correspondiente a la substanciación del Procedimiento de mérito.

XXIV. Sesión de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. En virtud de lo anterior, se procedió a formular el Proyecto de Resolución, que fue aprobado por unanimidad de los presentes, los Consejeros Electorales, Doctor Ciro Murayama Rendón, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, la Consejera Electoral, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles y el Consejero Presidente de la Comisión, Doctor Benito Nacif Hernández, en la Novena Sesión Extraordinaria de la Comisión de Fiscalización, celebrada el dieciséis de mayo de dos mil diecinueve.

Una vez sentado lo anterior, se procede a determinar lo conducente.

C O N S I D E R A N D O

1. Competencia. Con base en lo dispuesto por los artículos 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 196, numeral 1; 199, numeral 1, incisos c), k) y o); 428, numeral 1, inciso g), todos de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como 5, numeral 2, del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, la Unidad Técnica de Fiscalización es **competente** para tramitar, sustanciar y formular el presente Proyecto de Resolución.

Precisado lo anterior, y con base en el artículo 192, numeral 1, inciso b), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 5, numeral 1, del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, la Comisión de Fiscalización es competente para conocer el presente Proyecto de Resolución y, en su momento, someterlo a consideración del Consejo General.

En este sentido, de acuerdo a lo previsto en los artículos 41, Base V, apartado B, penúltimo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35, numeral 1; 44, numeral 1, inciso j) y 191, numeral 1, incisos d) y g), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, este Consejo General es competente para emitir la presente Resolución y, en su caso, imponer las sanciones que procedan.

Es relevante señalar que con motivo de la publicación llevada a cabo el veintitrés de mayo de dos mil catorce en el Diario Oficial de la Federación, de los Decretos por los que se expiden la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General de Partidos Políticos, y con las modificaciones a los Reglamentos de Fiscalización y de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, aprobadas por este Consejo General en sesiones extraordinaria y ordinaria celebradas el ocho de septiembre, dieciocho de diciembre de dos mil diecisiete y cinco de enero de dos mil dieciocho mediante Acuerdos INE/CG409/2017¹; INE/CG614/2017² e INE/CG04/2018 respectivamente, resulta indispensable determinar la normatividad sustantiva y adjetiva aplicable.

¹ Acuerdo por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Reglamento de Fiscalización, aprobado mediante ACUERDO INE/CG263/2014, modificado a través de los acuerdos INE/CG350/2014, INE/CG1047/2015, INE/CG320/2016, INE/CG875/2016 e INE/CG68/2017.

² Acuerdo por el que se modifica el reglamento de procedimientos sancionadores en materia de fiscalización, aprobado el diecinueve de noviembre de dos mil catorce en sesión extraordinaria del consejo general del instituto nacional electoral mediante el Acuerdo INE/CG264/2014, modificado a su vez con los Acuerdos INE/CG1048/2015 e INE/CG319/2016.

En este sentido, por lo que hace a la normatividad sustantiva tendrá que estarse a las disposiciones vigentes al momento en que se actualizaron los hechos que dieron origen al procedimiento administrativo sancionador, esto es a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General de Partidos Políticos, así como al Acuerdo mediante el cual se modifica el Reglamento de Fiscalización aprobado mediante el diverso INE/CG04/2018.

2. Estudio de fondo. Toda vez que no existen cuestiones de previo y especial pronunciamiento por resolver, esta autoridad procedió a analizar los documentos y las actuaciones que integran el expediente de mérito, de lo cual se desprende que el **fondo del presente asunto** se constriñe en determinar si la otrora Coalición “Por México al Frente” en Michoacán, integrada por los partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano y los CC. Antonio García Conejo y Alma Mireya González Sánchez, entonces candidatos al Senado, omitieron rechazar la aportación de ente impedido por la normatividad electoral consistente en el uso de 10 camionetas blindadas supuestamente propiedad del Gobierno del estado de Michoacán; conductas que podrían constituir infracciones a la Legislación Electoral en materia de financiamiento de los partidos políticos, durante el periodo de campaña en el marco del Proceso Electoral Federal 2017-2018.

En este sentido, debe determinarse si los sujetos obligados incumplieron con lo dispuesto en los artículos, 25, numeral 1, incisos a) e i); 54, numeral 1; 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos; así como 96, numeral 1 y 127 del Reglamento de Fiscalización, que a la letra disponen lo siguiente:

Ley General de Partidos Políticos

“Artículo 25.

1. Son obligaciones de los partidos políticos:

a) Conducir sus actividades dentro de los cauces legales y ajustar su conducta y la de sus militantes a los principios del Estado democrático, respetando la libre participación política de los demás partidos políticos y los derechos de los ciudadanos;

(...)

i) Rechazar toda clase de apoyo económico, político o propagandístico proveniente de extranjeros o de ministros de culto de cualquier religión, así como de las asociaciones y organizaciones religiosas e iglesias y de

*cualquiera de las personas a las que las leyes prohíban financiar a los partidos políticos
(...)”*

“Artículo 54.

1. No podrán realizar aportaciones o donativos a los partidos políticos ni a los aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de elección popular, en dinero o en especie, por sí o por interpósita persona y bajo ninguna circunstancia:

a) Los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación y de las entidades federativas, y los ayuntamientos, salvo en el caso del financiamiento público establecido en la Constitución y esta Ley;

b) Las dependencias, entidades u organismos de la Administración Pública Federal, estatal o municipal, centralizada o paraestatal, y los órganos de gobierno del Distrito Federal;

*c) Los organismos autónomos federales, estatales y del Distrito Federal;
(...)”*

“Artículo 79.

*1. Los partidos políticos deberán presentar informes de precampaña y de campaña, conforme a las reglas siguientes:
(...)”*

b) Informes de campaña:

*1. Deberán ser presentados por los partidos políticos, para cada una de las campañas en las elecciones respectivas, especificando los gastos que el partido político y el candidato hayan realizado en el ámbito territorial correspondiente
(...)”*

Reglamento de Fiscalización

“Artículo 96. Control de los ingresos

*1. Todos los ingresos de origen público o privado, en efectivo o en especie, recibidos por los sujetos obligados por cualquiera de las modalidades de financiamiento, deberán estar sustentados con la documentación original, ser reconocidos y registrados en su contabilidad, conforme lo establecen las Leyes en la materia y el Reglamento
(...)”*

“Artículo 127. Documentación de los egresos

- 1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la documentación original expedida a nombre del sujeto obligado. Dicha documentación deberá cumplir con requisitos fiscales.*
- 2. Los egresos deberán registrarse de conformidad con lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley de Partidos, las guías contabilizadoras y los catálogos de cuenta descritos en el Manual General de Contabilidad.*
- 3. El registro contable de todos los egresos relacionados con actos de precampaña, de periodo de obtención de apoyo ciudadano y de campaña deberán indicar la fecha de realización de dicho evento y el monto involucrado, en la descripción de la póliza a través del Sistema de Contabilidad en Línea. Tratándose del registro contable de los gastos relacionados con los eventos políticos, se deberá indicar por cada gasto registrado el identificador del evento asignado en el registro a que se refiere el artículo 143 bis de este Reglamento (...).”*

Ahora bien, por lo que hace a la normatividad transgredida es importante señalar que, al actualizarse una falta sustantiva se presenta un daño directo y efectivo en los bienes jurídicos tutelados, así como la plena afectación a los valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de los sujetos obligados, y no únicamente su puesta en peligro. Esto es, al actualizarse una falta sustancial por tolerar aportaciones de personas impedidas por la normatividad electoral, se vulnera sustancialmente la certeza y transparencia en el origen lícito de los ingresos.

Así las cosas, la falta sustancial de mérito trae consigo la no rendición de cuentas, impiden garantizar la claridad necesaria en el monto, destino y aplicación de los recursos; en consecuencia, se vulnera la certeza y transparencia como principios rectores de la actividad electoral.

El precepto en comento tiene una relación directa con el artículo 54, numeral 1 de la Ley General de Partidos Políticos, el cual establece un catálogo de personas a las cuales la normativa les establece la prohibición de realizar aportaciones o donativos a los partidos políticos, aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de elección popular, en dinero o especie, por sí o por interpósita persona y bajo ninguna circunstancia.

La prohibición de realizar aportaciones en favor de partidos políticos provenientes de entes prohibidos, existe con la finalidad de evitar que los partidos políticos como instrumentos de acceso al poder público estén sujetos a intereses privados alejados del bienestar general, como son los intereses particulares de personas morales.

En el caso concreto, la prohibición de recibir aportaciones en efectivo o en especie de entes no permitidos responde a uno de los principios inspiradores del sistema de financiamiento partidario en México, a saber, la no intervención de los sujetos previstos en el citado artículo 54, numeral 1 de la Ley General de Partidos Políticos; esto es, impedir cualquier tipo de injerencia de intereses particulares en las actividades propias de los partidos políticos, pues el resultado sería contraproducente e incompatible con el adecuado desarrollo del Estado Democrático.

Por lo anterior, es razonable que por la capacidad económica que un ente no permitido pudiera tener y por los elementos que podrían encontrarse a su alcance según la actividad que realicen, se prohíba a dichos sujetos realizar aportaciones a los partidos políticos.

Es importante señalar que con la actualización de la falta de fondo se acredita la afectación a los valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de partidos políticos, en este sentido, la norma transgredida es de gran trascendencia para la tutela del principio de origen debido de los recursos de los partidos políticos tutelados por la normatividad electoral.

Lo anterior es así porque en la aportación se trata de un acto unilateral, por lo que la manifestación de la voluntad del receptor no es necesaria para que se perfeccione el acto. En este sentido, la contravención al artículo mencionado no se presenta tras una participación de ambos sujetos, sino únicamente del aportante; sin embargo, el partido político tiene la obligación de rechazar toda clase de apoyo económico, político o propagandístico proveniente de algún ente prohibido por la normativa electoral.

Ahora bien, el hecho de que el beneficio no sea de carácter patrimonial no implica que para efectos del ejercicio de fiscalización el acto realizado no pueda ser valuado, puesto que, si bien no existe un acrecentamiento patrimonial, el aportante debió haber realizado un gasto para generar el beneficio (carácter económico), lo que permite precisamente la fiscalización.

Es evidente que una de las finalidades que persigue la norma al señalar como obligación de los partidos políticos rendir cuentas ante la autoridad fiscalizadora de manera transparente, es inhibir conductas que tengan por objeto y/o resultado impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora electoral, en efecto, la finalidad es precisamente garantizar que la actividad de dichos entes políticos se desempeñe en apego a los cauces legales.

En este sentido cabe decir, que la prohibición configurativa de la infracción típica básica (recibir una aportación en dinero o especie) deriva la proscripción subordinada o complementaria conforme a la dogmática aplicable, dirigida a los partidos políticos atinente a que se deben abstener de aceptar toda clase de apoyo proveniente de cualquier persona a la que les está vedado financiarlos.

Por otro lado, se desprende que los partidos políticos tienen la obligación de presentar ante la autoridad fiscalizadora electoral, los informes de campaña correspondientes al ejercicio sujeto a revisión, en los que informen sobre el origen y aplicación de los recursos que se hayan destinado para financiar los gastos realizados para el sostenimiento de sus actividades, mismos que deberán estar debidamente registrados en su contabilidad, acompañando la totalidad de la documentación soporte dentro de los plazos establecidos por la normativa electoral.

La finalidad, es preservar los principios de la fiscalización, como lo son la transparencia y rendición de cuentas y de control, mediante las obligaciones relativas a la presentación de los informes, lo que implica la existencia de instrumentos a través de los cuales los partidos rindan cuentas a la autoridad fiscalizadora respecto de los ingresos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo y aplicación (egresos o gastos), coadyuvando a que esta autoridad cumpla con sus tareas de fiscalización a cabalidad.

Del análisis anterior, es posible concluir que la inobservancia de los artículos referidos vulneran directamente la certeza y transparencia en la rendición de cuentas, en tanto, es deber de los sujetos obligados informar en tiempo y forma los movimientos realizados y generados durante el periodo a revisar para el correcto desarrollo de su contabilidad, otorgando una adecuada rendición de cuentas, al cumplir los requisitos señalados por la normatividad electoral, mediante la utilización de los instrumentos previamente establecidos para ello y permitiendo a la autoridad llevar a cabo sus actividades fiscalizadoras.

Dicho lo anterior, es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador al señalar como obligación de los sujetos obligados rendir cuentas ante la autoridad fiscalizadora de manera transparente, es inhibir conductas que impidan o intenten impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora electoral.

Así, los referidos preceptos normativos, tutelan los principios rectores de la fiscalización, tales como son la equidad, transparencia e imparcialidad, pues los institutos políticos deben buscar cumplir con las reglas que la contienda electoral conlleva, esto con la finalidad de que ésta se desarrolle en un marco de legalidad, pues, su vulneración implicaría una transgresión directa a la norma electoral.

De las premisas normativas se desprende la obligación de presentar ante la autoridad fiscalizadora electoral, los informes de campaña correspondientes al ejercicio sujeto a revisión, en los que informen sobre el origen y aplicación de los recursos que se hayan destinado para financiar los gastos realizados para el sostenimiento de sus actividades, mismos que deberán estar debidamente registrados en su contabilidad, acompañando la totalidad de la documentación soporte dentro de los plazos establecidos por la normativa electoral.

Dichos preceptos normativos, tutelan los principios rectores de la fiscalización, tales como son la equidad, transparencia e imparcialidad, pues los institutos políticos deben buscar cumplir con las reglas que la contienda electoral conlleva, esto con la finalidad de que ésta se desarrolle en un marco de legalidad, pues, su vulneración implicaría una transgresión directa a la norma electoral.

En suma, los citados artículos señalan como supuestos de regulación los siguientes:

1) La obligación de los partidos políticos y candidatos de reportar sus ingresos y egresos para sufragar gastos de campaña, a través del informe respectivo; 2) la obligación de los sujetos obligados de atender los requerimientos de información de la autoridad fiscalizadora; y 3) La obligación de los partidos políticos y candidatos de no rebasar los topes de gastos de campaña que la Autoridad, al efecto fije.

Por último, en cuanto al artículo 25, numeral 1, inciso i) tiene una relación directa con el artículo 54, numeral 1 de la Ley General de Partidos Políticos, el cual establece un catálogo de personas a las cuales la normativa les establece la prohibición de realizar aportaciones o donativos a los partidos políticos, aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de elección popular, en dinero o especie, por sí o por interpósita persona y bajo ninguna circunstancia.

La prohibición de realizar aportaciones en favor de partidos políticos provenientes de entes prohibidos, existe con la finalidad de evitar que los partidos políticos como instrumentos de acceso al poder público estén sujetos a intereses privados alejados del bienestar general, como son los intereses particulares de personas morales.

En el caso concreto, la prohibición de recibir aportaciones en efectivo o en especie de entes no permitidos responde a uno de los principios inspiradores del sistema de financiamiento partidario en México, a saber, la no intervención de los sujetos previstos en el citado artículo 54, numeral 1 de la Ley General de Partidos Políticos; esto es, impedir cualquier tipo de injerencia de intereses particulares en las actividades propias de los partidos políticos.

Así los preceptos citados tienen la finalidad de que los sujetos obligados cumplan cabalmente con el objeto de la ley, brindando certeza del destino de los recursos ejercidos en sus operaciones y que éstas no se realicen mediante el empleo de mecanismos prohibidos por la ley, por lo tanto, la norma citada resulta relevante para la protección de los pilares fundamentales que definen la naturaleza democrática del Estado Mexicano.

En este mismo orden de ideas, y previo a entrar al estudio de fondo del asunto, es importante señalar los motivos que dieron origen al inicio de procedimiento de queja que por esta vía se resuelve.

Dicho lo anterior, es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador al señalar como obligación de los Partidos Políticos Nacionales el cumplir con los topes de gastos de campaña establecidos, es que la autoridad fiscalizadora inhiba conductas que tengan por objeto y/o resultado poner en riesgo la equidad y certeza en el Proceso Electoral.

Por tanto, se trata de normas que protegen un bien jurídico de un valor esencial para la convivencia democrática y el funcionamiento del Estado en sí, esto, porque los partidos políticos son parte fundamental del sistema político electoral mexicano, pues son considerados constitucionalmente entes de interés público que reciben financiamiento del Estado y que tienen como finalidad, promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación nacional, y hacer posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público, de manera que las infracciones que cometa un partido en materia de fiscalización origina una lesión que resiente la sociedad e incide en forma directa sobre el Estado.

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/692/2018

Visto lo anterior, a fin de verificar si se acreditan los supuestos que conforman el fondo del presente asunto, de conformidad con el artículo 21, numeral 1 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, deberán analizarse, adminicularse y valorarse cada uno de los elementos de prueba que obran dentro del expediente, de conformidad con la sana crítica, la experiencia, las reglas de la lógica y los principios rectores de la función electoral.

Mediante el escrito de queja presentado por el C. Juan Antonio Ixtlahuac Orihuela, otrora candidato al Senado de la República por el Partido Revolucionario Institucional, en contra de los CC. Antonio García Cornejo y Alma Mireya González Sánchez, entonces candidatos al Senado de la República por la Coalición por México al Frente, integrada por los partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, en el marco del Proceso Electoral Federal 2017-2018, el quejoso denunció hechos que considera podrían constituir infracciones a la normativa electoral, en materia de origen, monto, destino y aplicación de los recursos derivados del financiamiento de los partidos políticos por la supuesta omisión de rechazar la aportación de persona impedida por la normatividad electoral consistente en el **uso de nueve camionetas blindadas de la marca Jeep Grand Cherokee Limited, modelo 2016 así como de una camioneta de la marca Suburban LTZ, modelo 2016, arrendadas por el gobierno del estado de Michoacán**, lo anterior, supuestamente en beneficio de la campaña de los sujetos denunciados.

Debe señalarse que, en virtud de lo expuesto previamente, el seis de septiembre de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/43369/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización envió informe a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, a efecto de que está dentro de sus atribuciones determinara lo que a derecho procediera respecto a un posible uso de *“Recursos Públicos”* denunciados en el escrito de queja de mérito.

Ahora bien, respecto a la supuesta infracción cometida, para sostener sus afirmaciones en su escrito inicial, el quejoso aporta un total de 2 fotografías, de las cuales, en la primera fotografía se puede apreciar la imagen de un vehículo sin que se precisen circunstancias o elementos que permitan identificar modelo, color, número de placa, ni lugar en donde transita, dicha imagen fue tomada de una nota periodista publicada en el link <https://www.idimedia.com/investigaciones-disruptivas/gasta-gobierno-de-michoacan-63-mdp-en-arrendamiento-de-camionetas-blindadas/>, a continuación se inserta la imagen:



Por lo que hace a la segunda fotografía, se observa una camioneta bicolor (blanca-amarilla) rotulada con la imagen de un hombre, asimismo se visualiza la leyenda “¡Vota!” debajo de dicha leyenda aparecen los emblemas correspondientes a los partidos que integran la coalición “Por México al Frente”; con dichas fotografías el quejoso pretende acreditar el supuesto uso de vehículos arrendados por el Gobierno del estado de Michoacán durante la campaña de los candidatos denunciados, lo cual, a dicho del quejoso le representó un beneficio a las campañas de los incoados, en razón de lo cual, argumenta el denunciante, dicho gasto y en su caso aportación, debió haber sido reportado en el informe de campaña de los referidos candidatos.



Ahora bien, en el ejercicio de las facultades fiscalizadores, esta autoridad, procedió a realizar diversas diligencias con el ánimo de esclarecer los hechos que dieron origen a la denuncia que por esta vía se resuelve, en razón de lo cual, por lo que respecta a la primer fotografía, la Unidad Técnica de Fiscalización, el día cinco de septiembre de la presente anualidad, solicito a la Dirección del Secretariado de este Instituto, la certificación de la URL <https://www.idimedia.com/investigaciones-disruptivas/gasta-gobierno-de-michoacan-63-mdp-en-arrendamiento-de-camionetas-blindadas/>.

Debe resaltarse que se verifica y constata que la fotografía proporcionada fue utilizada en una nota periodística; y de la observación de la misma, se aprecia un vehículo tipo camioneta, de la que nos encontramos imposibilitados para determinar, su modelo, color, marca, placa; logrando apreciar la imagen montada del otrora candidato al Senado de la República, el C. Antonio García Conejo, tripulando dicho vehículo. Atendiendo a la carencia de datos de identificación verificables de la misma, es que se afirma que no existen elementos que permitan asegurar que la misma, forme parte del parque vehicular objeto materia del contrato de arrendamiento identificado con la clave alfanumérica CAPDE-EM-LPE-021/2017-1.

En virtud de lo anterior, es importante mencionar que, las fotografías relacionadas en el párrafo que antecede, constituyen pruebas técnicas de conformidad con lo establecido por el artículo 17, del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, por lo que para perfeccionarse deben de administrarse con otros elementos de prueba que en su conjunto permitan acreditar los hechos materia de denuncia, en este contexto, su valor es indiciario.

Sirve para sustentar lo anterior la Jurisprudencia 4/2014³, emitida por la Sala Superior del Poder Judicial de la Federación, mediante la cual se determinó que:

“(...) las pruebas técnicas son insuficientes, por sí solas, para acreditar de manera fehaciente los hechos que contienen; toda vez que dada su naturaleza, tienen un carácter imperfecto debido a la relativa facilidad con que se pueden confeccionar y modificar, así como la dificultad para demostrar, de modo absoluto e indudable, las falsificaciones o alteraciones que pudieran haber sufrido, por lo que las mismas resultan insuficientes, por sí solas, para acreditar de manera fehaciente los hechos que pudieran contener, de ahí que resulte necesaria la concurrencia de algún otro elemento de prueba con el cual deben ser administradas, que las puedan corroborar o perfeccionar la veracidad y existencia de los hechos que se pretenden acreditar con éstas (...)”

De este modo ésta autoridad electoral, con base en las facultades de vigilancia y fiscalización; y atendiendo al hecho de que se denunció la supuesta omisión de

³ **PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN.** - De la interpretación de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 14, párrafos 1, inciso c), y 6, 16, párrafos 1 y 3, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se desprende que toda persona tiene derecho a un debido proceso, para lo cual se han establecido formalidades esenciales, y que en los medios de impugnación previstos en materia electoral pueden ser ofrecidas, entre otras, pruebas técnicas. En este sentido, dada su naturaleza, las pruebas técnicas tienen carácter imperfecto -ante la relativa facilidad con que se pueden confeccionar y modificar, así como la dificultad para demostrar, de modo absoluto e indudable, las falsificaciones o alteraciones que pudieran haber sufrido- por lo que son insuficientes, por sí solas, para acreditar de manera fehaciente los hechos que contienen; así, es necesaria la concurrencia de algún otro elemento de prueba con el cual deben ser administradas, que las puedan corroborar o corroborar.

reportar gastos por concepto de uso de camionetas blindadas propiedad del Gobierno de Michoacán, así como una supuesta omisión de rechazar aportación de persona impedida por la normativa electoral, por parte de los sujetos denunciados en su informe respectivo, procedió a notificar el inicio del procedimiento de mérito y a emplazar a los CC. Antonio García Cornejo y Alma Mireya González Sánchez, ambos candidatos al Senado de la República por la entonces coalición “Por México al Frente” en Michoacán, integrada por los partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, a quienes también se les notificó dicho procedimiento y emplazó.

Al respecto, el Representante Propietario del Partido Acción Nacional, dio respuesta al oficio de notificación de inicio del procedimiento y emplazamiento materia de la presente Resolución, negando las imputaciones realizadas por el quejoso, al manifestar que la queja en estudio fue presentada fuera de los plazos necesarios; asimismo señala que las fotografías no se encuentran certificadas por ningún autoridad competente; respecto al contrato de arrendamiento identificado con la clave alfanumérica CAPDE-EM-LPE-021/2017, menciona que dicho contrato no fue firmado por ninguno de sus representados, sin embargo, deja claro que no por el simple hecho de que el Gobernador del Estado de Michoacán sea hermano del otrora candidato a Senador, el C. Antonio García Conejo, ello implique que haya utilizado las camionetas o bien los recursos públicos.

Por su parte, el Representante Propietario del Partido de la Revolución Democrática, desahogo el emplazamiento respectivo, manifestando que el objeto de la queja era incongruente, puesto que sus argumentos se centran en demostrar el uso de recursos públicos, en concreto en el uso de vehículos al servicio del Gobierno del Estado de Michoacán a favor de la candidatura al Senado de la República, más no el exceso en los gastos de campaña, de ahí que la queja resulta ser oscura e imprecisa. En cuanto al contrato de arrendamiento referido con antelación; manifiesta que no existe mención alguna que vincule a los diversos automotores que se refiere dicho contrato con aquellos que fueron registrados en Sistema Integral de Fiscalización de la campaña, por lo que no existe ningún medio de convicción que brinden certeza respecto a lo dicho en la nota periodística, los razonamientos del propio quejoso y los registros validados por la autoridad fiscalizadora.

Asimismo, el Representante Propietario del Partido Movimiento Ciudadano, dio respuesta refiriendo que en el caso de las candidaturas de las Senadurías y Diputaciones el partido responsable del registro y control del gasto de campaña será el partido que lo postuló, por lo que el partido que ostentaba la información solicitada,

era el Partido de la Revolución Democrática, puesto este era el encargado de dichas candidaturas.

Ahora bien, a efecto de continuar con la línea de investigación y así poder corroborar si se actualizó la conducta infractora de la normativa electoral, la Unidad procedió a efectuar una búsqueda en el Sistema Integral de Fiscalización (SIF), con la finalidad de detectar algún registro de una aportación similar a la denunciada. Concluyendo que, del estudio de las contabilidades de los sujetos incoados, no existe el **uso de camionetas blindadas aportadas por persona impedida**.

No obstante la información anterior; el seis de septiembre del año en curso, esta autoridad solicitó información a la Dirección de Auditoría, con la intención de conocer si de la revisión de los informes de campaña correspondientes a los sujetos citados previamente, se localizaron registros por concepto de camionetas; y como resultado de ello, dicha Dirección determinó la existencia del registro por concepto de transportación en camionetas, sin que se tratara de las denunciadas por el quejoso; aseveración a la que se concluye al tenor de los siguientes razonamientos:

Por lo que respecta a la información relacionada con el C. Antonio García Conejo por el uso y goce temporal de dos camionetas de modelo 2018, esta fue remitida por la Dirección de Auditoría, a través del medio magnético adjunto al oficio número INE/UTF/DA/43601/2018, mediante el cual, se solicitó se informara si existió reporte de gastos de campaña relacionados derivados de la referida aportación consistente en la utilización de camionetas de la marca Jeep Grand Cherokee, modelo 2016, así como de una camioneta de la marca Suburban LTZ, modelo 2016.

De la información remitida se deduce que en el **ID DE CONTABILIDAD: 43006** a nombre del C. Antonio García Conejo, se registró la aportación en especie de dos camionetas Gran Cherokee, a continuación, se indica la información y documentación registrada y reportada en el SIF:

- Recibo de aportación con número de folio 00013 expedido a nombre de Guzmán Grajeda José Carlos, por concepto de aportación de Vehículo Gran Cherokee, blanco con número de serie 1C4RJFBT3JC217167, por tres meses para la campaña del Senador de Michoacán, el C. Antonio García Conejo, lo anterior, como se hace constar en las **pólizas número 2 del periodo 1 y la póliza número 88 del periodo 3; ambas pertenecientes al subtipo de póliza denominado “Diario”**.

Derivado de lo anterior, se anexa evidencia fotográfica.

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/692/2018



- Recibo de aportación de militantes y del candidato con número de folio 25-141, por concepto de arrendamiento de Vehículo Gran Cherokee Modelo 2017, Limited, por 40 días para la campaña del Senador de Michoacán, el C. Antonio García Conejo, contrato de renta de bien mueble –cuyo objeto es el uso del Vehículo Automotor marca Jeep, Grand Cherokee, Limited 3.6L, V6, V7P, 4X2, Automática-, con placas de circulación PGA51217 , así como las credenciales para votar, lo anterior, como se hace constar en la **póliza número 47 del periodo 1; tipo Normal, subtipo de póliza denominado “Diario”**.

Es importante señalar que las fotografías y la documentación proporcionada constituyen documentales públicas y pruebas técnicas en términos de los artículos 16, numeral 1 y 17 numeral 1, del Reglamento de Procedimientos en materia de Fiscalización, que en concordancia con el artículo 21, numeral 3, del citado reglamento, al ser adminiculadas entre sí y con la información remitida por parte de la Dirección de Auditoría, la cual fue obtenida del Sistema Integral de Fiscalización (SIF); hace prueba plena, por lo que los gastos denunciados derivados de la aportación aludida consistente en el **uso de camionetas**, fueron reportados a través del **ID CONTABILIDAD: 43006**, perteneciente al perfil del C. Antonio García Conejo.

Aunado a lo anterior, esta autoridad electoral estima pertinente, hacer mención que la Unidad Técnica de Fiscalización, requirió información a la empresa denominada Capital Leasing México S.A. de C.V., para que indicara si los CC. Antonio García Conejo y Alma Mireya González Sánchez, ambos otroras candidatos al Senado de la República, así como los Partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano que integraron la otrora Coalición “Por México al Frente” en Michoacán, contrataron con dicha empresa el arrendamiento de 9 camionetas blindadas de la marca Jeep Grand Cherokee Limited, modelo 2016, así como de una camioneta de la marca Suburban LTZ; en caso afirmativo, presentara el contrato, así como las facturas y muestras de cada uno de los gastos por concepto de arrendamiento de las referidas camionetas; manifestando la aludida empresa, que no había celebrado contrato alguno con los sujetos incoados.

En consecuencia, la citada persona moral remitió el contrato arrendamiento identificado con la clave alfanumérica CAPDE-EM-LPE-021/2017, del cual se observa que las partes que suscribieron dicho contrato fueron el Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo, por conducto de la Secretaria de Finanzas y

Administración, representados por el Licenciado Carlos Maldonado Mendoza en su carácter de Secretario de Finanzas y Administración y como responsable del proceso de adjudicación el Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo, representado por el Licenciado Guillermo Loaiza Gómez, en su carácter de Director General, por lo que del mismo no se pueda concluir que exista relación alguna con los sujetos denunciados, puesto que no hay vínculo, relación, causa y/o conexidad al respecto, **por tanto; al no preexistir relación con los sujetos denunciados, se determina que no existe omisión alguna.**

No obstante, lo anterior, y con la finalidad de allegarse de mayores elementos de convicción, esta autoridad fiscalizadora, giró un segundo requerimiento a la empresa Capital Leasing México S.A. de C.V., para que indicara los siguiente:

- Sí la camioneta marca **Jeep, Grand Cherokee, Limited 3.6L, V6, V7P, 4X2, Automática**, con placas de circulación PGA51217, era propiedad de dicha empresa.
- Sí derivado de los bienes y/o servicios que presta (siendo que la empresa Capital Leasing México S.A. de C.V. tiene por objeto el arrendamiento vehicular), dicho vehículo se encontraba dentro sus bienes o activo.
- Sí dentro de los bienes o activos de la empresa se localizaba algún automóvil con placas PGA51217.
- Sí la empresa Capital Leasing México S.A. de C.V, durante los años 2017 y 2018, celebro algún contrato de arrendamiento vehicular con alguna dependencia del gobierno del estado de Michoacán o con alguna empresa o persona física, cuyo objeto hubiera sido el automotor Jeep, Grand Cherokee, Limited 3.6L, V6, V7P, 4X2, Automática, placas de circulación PGA51217.
- Asimismo, se le solicito que informará C. José Carlos Guzmán Grajeda, formaba parte de algún órgano directivo o administrativo de la empresa Capital Leasing México S.A. de C.V o si era propietario de la misma también se le solito informará si existía alguna relación laboral entre la referida persona moral y el citado ciudadano.⁴

⁴ Es preciso señalar que el C. Jose Carlos Guzmán fue el aportante que dono la camioneta utilizada durante la campaña del candidato incoado, en razón de lo cual se solicitó si existía algún vínculo.

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/692/2018

En respuesta lo anterior el representante legal de la empresa Capital Leasing México S.A. de C.V señaló que, no era propietaria del Vehículo Jeep, Grand Cherokee, Limited 3.6L, V6, V7P, 4X2, Automática, placas de circulación PGA51217, y que dentro de sus activos y bienes no se localizó ningún automóvil con placas de circulación PGA51217, asimismo señaló que a la fecha no ha celebrado ningún contrato de arrendamiento vehicular con ninguna dependencia del gobierno del estado de Michoacán ni con alguna empresa o persona física en el cual se hubiera tenido por objeto una camioneta con las características ya señaladas, asimismo desconoció tener vinculo o relación alguna de ningún tipo con el C. José Carlos Guzmán Grajeda.

En razón de los señalamientos vertidos anteriormente se concluye que no se acreditó coincidencia entre las camionetas denunciadas y la utilizada por el candidato durante su campaña la cual fue reportada en el informe correspondiente.

No es óbice señalar, que si bien, ni del escrito inicial, ni de los elementos aportados por la quejosa, se desprende que se indique el número de placa de las camionetas que supuestamente fueron aportadas por el gobierno del estado de Michoacán, siendo la matricula, un elemento innegable de identificación⁵ de un vehículo, y al no coincidir las características físicas, ni año, modelo, ni versión de los vehículos automotores denunciados⁶, con los que son objeto del contrato de arrendamiento, se tiene por acreditado que no se trata de los mismos vehículos.

Ahora bien, por cuanto hace al supuesto **uso de una camioneta de la marca Suburban LTZ, modelo 2016**, esta autoridad no cuenta con elementos de prueba que vinculen el contenido de la misma con un presunto beneficio a favor de los sujetos denunciados; del mismo modo y derivado del análisis integral realizado al expediente en estudio; no se desprendieron elementos que permitieran a esta autoridad determinar la existencia de conductas que vulneren disposiciones en materia de fiscalización; por lo que del escrito de queja no se advierten mayores elementos de prueba que concatenados entre sí generen convicción a esta autoridad en cuanto a los hechos que pudieran desprenderse de estas.

⁵ Las **matrículas automovilísticas de México** son el registro que usan los vehículos automotores para su identificación. **Norma oficial mexicana NOM-001-SCT-2**

⁶ Del cual el único elemento de prueba es una imagen donde no se observa el número de placas.

Adicional a lo anterior, esta autoridad considera relevante hacer constar que, respecto a la C. Alma Mireya González Sánchez, candidata al Senado de la República postulada por la otrora Coalición “Por México al Frente” en Michoacán, integrada por los partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, el quejoso no aportó mayores elementos de prueba que la vinculen con los hechos denunciados.

En virtud de lo anterior, del simple contenido de la prueba técnica, no se advierten elementos que actualicen conductas que vulneren disposiciones en materia de fiscalización; aunado a ello, es oportuno señalar que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ha señalado que las fotografías (imágenes) como medio de prueba son susceptibles de ser manipuladas, por lo que resulta un medio probatorio limitado.

En primer término, esta autoridad no es omisa en señalar que las pruebas con las que sustenta su escrito de queja el hoy quejoso consisten en pruebas técnicas, lo anterior resulta fundamental para determinar el alcance que pueden tener las pruebas técnicas ofrecidas por el quejoso para acreditar y probar la pretensión formulada. En efecto, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se ha pronunciado en diversas ocasiones respecto del alcance de las pruebas técnicas para demostrar los hechos que contienen. En este sentido, la Jurisprudencia 4/2014 de rubro **“PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE SE CONTIENEN”**, emitida por dicho tribunal electoral, señala que es posible que se ofrezcan este tipo de pruebas. Sin embargo, dada la naturaleza de las mismas, es decir, su carácter imperfecto, toda vez que son susceptibles de modificación, alteración o falsificación con relativa facilidad, resultan insuficientes por sí solas para acreditar fehacientemente los hechos que contienen.

Es importante insistir en el alcance de las pruebas técnicas con base en los criterios sustentados por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación toda vez que, el quejoso parte de una premisa errónea al establecer que **“... la prueba técnica identifica a las personas, los lugares y las circunstancias de modo y tiempo que reproduce la prueba.”**

En este sentido, en razón de su naturaleza, por sí mismas las pruebas técnicas no acreditan los hechos o circunstancias que reproduce la misma.

A mayor abundamiento, las imágenes referidas no arrojan indicio alguno que permitan trazar una línea de investigación para determinar si existió un beneficio a la campaña de los CC. Antonio García Cornejo y Alma Mireya González Sánchez, ambos otroras candidatos al Senado de la República por la entonces coalición “Por México al Frente” en Michoacán, integrada por los partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, por los conceptos denunciados en el escrito de queja.

Por las razones expuestas en párrafos anteriores, se concluye que los hechos denunciados, consistentes en la supuesta omisión de reportar el gasto o en su caso el ingreso por una posible aportación de persona prohibida, consistente en el **uso de 10 camionetas blindadas** materia de denuncia de la queja respectiva, éstos, no fueron acreditados, en razón de la falta de elementos probatorios por parte del denunciante, ya que únicamente aportó pruebas en relación a 1 camioneta marca Grand Cherokee Limited, modelo 2016, y por cuanto hace a la camioneta de la marca Suburban LTZ, únicamente hace la simple mención en su escrito de queja, por lo anterior y en relación con las diligencias realizadas por la autoridad sustanciadora, el hecho denunciado consistente en el uso de 10 camionetas blindadas (**9 de la marca Jeep Grand Cherokee Limited, modelo 2016 y una de la marca Suburban LTZ, modelo 2016**) no se tiene por acreditado; ahora bien, no pasa desapercibido, que producto de la investigación realizada por la misma autoridad se obtuvo que el otrora candidato Antonio García Cornejo, sí utilizó vehículos marca Grand Cherokee Limited durante su campaña pero que los mismos no corresponden a los denunciados, ya que las características, modelo, año y palcas de circulación no coinciden con los denunciados.

Así mismo los vehículos utilizados sí fueron registrados y reportados a través del Sistema Integral de Fiscalización (SIF) en el informe de campaña correspondiente, por lo que esta autoridad determina que, a pesar de la imperfección de las pruebas técnicas ofrecidas por el denunciante, y de acuerdo al principio de exhaustividad, esta autoridad fiscalizadora se allegó de mayores elementos que generaron la convicción de la existencia de dichas operaciones, así como el registro de éstas en los referidos sistemas.

Visto lo anterior, esta autoridad cuenta con elementos de certeza suficientes para acreditar que el sujeto denunciado reportó ante la autoridad electoral, en el marco de

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/692/2018

la revisión de los informes de campaña correspondiente, los gastos denunciados, mismos que no constituyeron ninguna aportación proveniente del gobierno del estado de Michoacán de Ocampo, por lo que no se acreditó ninguna aportación de ente prohibido.

En razón de los argumentos expuestos, este Consejo General determina que no existen elementos que lleven a concluir que los CC. Antonio García Cornejo y Alma Mireya González Sánchez, ambos otroras candidatos al Senado de la República por la entonces coalición “Por México al Frente”, integrada por los partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, hayan transgredido lo preceptuado en los artículos, 25, numeral 1, incisos a) e i); 54, numeral 1; 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos; así como 96, numeral 1 y 127 del Reglamento de Fiscalización, motivo por el cual esta autoridad considera debe declararse **infundado** el presente procedimiento administrativo de queja, en virtud de que los argumentos del quejoso son parciales y con aportación de documentales subjetivas.

En atención a los Antecedentes y Considerandos vertidos, y en ejercicio de las atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35, numeral 1; 44, numeral 1, inciso j) y 191, numeral 1, inciso d) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se:

R E S U E L V E

PRIMERO. Se declara **infundado** el presente procedimiento administrativo sancionador electoral en materia de fiscalización instaurado en contra de **la otrora Coalición “Por México al Frente” en Michoacán, integrada por los partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano y los CC. Antonio García Cornejo y Alma Mireya González Sánchez, entonces candidatos al Senado de la República** en el marco del Proceso Electoral Federal 2017-2018, en los términos del **Considerando 2** de la presente Resolución.

SEGUNDO. Notifíquese la presente Resolución.

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/692/2018

TERCERO. En términos de lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación el recurso que procede en contra de la presente determinación es el denominado “recurso de apelación”, el cual según lo previsto en los numerales 8 y 9 del mismo ordenamiento legal se debe interponer dentro de los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en que se tenga conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado de conformidad con la ley aplicable, ante la autoridad señalada como responsable del acto o resolución impugnada.

CUARTO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total y definitivamente concluido.

La presente Resolución fue aprobada en sesión ordinaria del Consejo General celebrada el 22 de mayo de 2019, por diez votos a favor de los Consejeros Electorales, Licenciado Enrique Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello, y un voto en contra de la Consejera Electoral, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles.

**EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL
CONSEJO GENERAL**

**EL SECRETARIO DEL
CONSEJO GENERAL**

**DR. LORENZO CÓRDOVA
VIANELLO**

**LIC. EDMUNDO JACOBO
MOLINA**